

Marcos jurídicos que protegen o amenazan la integridad de los glaciares



Capítulo III

LA LEY DE GLACIARES EN ARGENTINA: PROCESO Y PERSPECTIVA REGIONAL

Marta Maffei

Diputada mandato cumplido de la República Argentina

1. Contexto social y político del derecho ambiental

El objetivo central de mi trabajo legislativo en la defensa del derecho ambiental, consistió en procurar que la información científica y los conocimientos socialmente valiosos, construidos por la ciudadanía y la sociedad civil, pudieran transformarse en políticas concretas, particularmente en garantías ciudadanas para el ejercicio de los derechos ambientales y en la sustentabilidad ambiental en los modos de producción y consumo. En particular tuve una larga lucha en defensa de los glaciares y del ambiente periglaciario.

Este desafío en defensa del derecho ambiental y de los bienes sociales con una mirada solidaria intra e intergeneracional, enfrenta dificultades sociales, legales, jurídicas, y políticas múltiples. Por un lado en el escenario político se teje la trama que apunta a la desprotección del ambiente: alianzas y negocios sin transparencia entre funcionarios públicos y empresarios. Corrupción. Grupos económicos presionando para reducir controles, normas y condiciones que puedan restringir sus márgenes de ganancias. Defensa del mercado y el economicismo a ultranza y por encima de cualquier otro derecho. Descalificación y agravio a las voces críticas tratadas como enemigos del crecimiento y del progreso, aún como cómplices voluntarios o no del retraso nacional. Desinformación y manipulación de la opinión pública. Complicidad de los medios de comunicación.

Por otro lado la legislación ambiental de cuño reciente e insuficiente, tiene una práctica recortada por los propios juristas y académicos -especialmente, los de mayor edad- que no recibieron originariamente formación en derecho ambiental, lo miran con desconfianza, genera trabas al accionar empresario sin que se exija la comprobación del daño. Lo ven como una moda pasajera y una obsesión de los sectores ambientalistas. Proclaman: “toda producción contamina”, “es imposible crecer sin contaminar”. Desde esta perspectiva, por ejemplo el principio precautorio es considerado un “obstaculizador del progreso”.

Por su parte, las comunidades afectadas por problemas socioambientales son, por lo general, las mismas que han sido históricamente marginadas, invisibilizadas y fragmentadas por el modelo de desarrollo capitalista vigente. En su mayoría, carecen de recursos e información para participar en litigios por la defensa de sus derechos y territorios. Su grado de desprotección las vuelve vulnerables a las estrategias de cooptación; promesas y esperanzas se tejen para lograr consenso social alrededor emprendimientos contaminantes, inciertos y riesgosos cuyos efectos se perciben años después, cuando ya son prácticamente irreversibles. Además, para demostrar los daños ambientales se requieren pruebas difíciles de obtener por sus costos inaccesibles para las comunidades afectadas muchas veces dispersas y alejadas de los centros más poblados.

Es este escenario, un pequeño grupo de legisladores trabajamos en la generación de instrumentos legales claros y bien definidos para la defensa del derecho de todos a la salud, al bienestar, a la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. Fundamentalmente, el derecho a vivir sin comprometer el futuro en aras del crecimiento económico infinito, en medio de la pobreza, la marginalidad, el saqueo y la destrucción de nuestros bienes comunes, como la Tierra, el agua, el aire, la biodiversidad, los minerales y todos los bienes que ofrece la naturaleza.

Advertimos que esta tarea política y legislativa solo podía avanzar si lográbamos gestar alianzas sociales con los afectados (actuales y futuros), con los espacios académicos, con las organizaciones sociales y trabajando fuertemente al interior de los propios partidos políticos. La comunidad sospecha. El vínculo ambiente-enfermedad es cada vez más difícil de ocultar. Los medios alternativos ofrecen posibilidades de acceso a otra información. El sistema educativo sensibiliza y otorga herramientas. La resistencia social crece, la desconfianza también. Se abre un panorama, que se puede aprovechar e incentivar, en pos de los consensos indispensables para hacer realidad del derecho ambiental.

2. Orígenes de la nueva legislación sobre glaciares en Argentina

Hace cerca de una década, comunidades de regantes en Chile denunciaban la creciente insuficiencia de agua para sus plantaciones, para la vida de sus ganados y de sus familias, como consecuencia del uso intensivo de las cuencas hídricas en los emprendimientos mineros a cielo abierto. En Argentina, este tipo de explotación y su problemática era muy incipiente y prácticamente desconocida¹.

Solapadamente, el gobierno de Menem había avanzado en acuerdos y disposiciones legales favorables al desarrollo intensivo de la minería, con escasísima información pública. Así se aprobó un paquete de 12 o 13 leyes de fomento e incentivo (directo e indirecto) a la minería metalífera que dejaron al país inerme ante el saqueo neocolonial. Una legislación tan permisiva como nociva a tal punto que los empresarios mineros reunidos en Canadá, declararon a Argentina como el país “vedette de la minería”.

Particularmente relevante es el Acuerdo de Complementación Económica, suscrito por los gobiernos de Chile y Argentina (encabezados, en ese entonces, por los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem), que hizo posible el Tratado de Integración y Complementación Minera entre ambos países, para el desarrollo de explotaciones binacionales a lo largo de la frontera compartida².

¹ Mientras participaba de un encuentro gremial en Chile, como Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), fui testigo de una marcha de protesta organizada por los regantes de Huasco (N. de la A.).

² Un relato y análisis de estos procesos se encuentran en el libro “El País Virtual”, del economista chileno Julián Alcayaga. En él, funcionarios de Barrick Gold reconocen que el Tratado de Integración y Complementación Minera fue diseñado por esta empresa y era absolutamente lineal a sus intereses.

Al Tratado le siguieron varios Protocolos Adicionales. En especial, cabe destacar el firmado en 2004 por el Canciller argentino Rafael Bielsa y la chilena María Soledad Alvear Valenzuela. Entre otras arbitrariedades, allí se establece que la tributación por el mineral extraído en emprendimientos binacionales se hace efectiva por el lugar de extracción del mineral, (informado por la empresa explotadora) sin considerar el lugar de procesamiento. La salida del mineral a un territorio diferente al de su origen es “exportación” del país de origen, “importación” para el receptor/comprador y “en tránsito” para el receptor cuando el destino final sea un tercer país. Por este Protocolo, Argentina permite en su territorio la industrialización, procesamiento, lixiviado, refinado, provee agua, energía, se queda con todos los pasivos ambientales y sociales, sin recibir nada: el mineral está “en tránsito”.

Con este marco jurídico y político, algunos parlamentarios y asesores comenzamos a trabajar en el diseño de una legislación que pudiera proteger los glaciares y pusiera freno a la locura extractivista como su más inminente amenaza. Advertimos el riesgo cierto para el agua y en particular para los glaciares y trabajamos en conjunto con geólogos y especialistas en nivología y glaciación para determinar los factores causantes y los niveles de riesgo y vulnerabilidad para los glaciares y el ambiente peri glaciar³. En forma paralela a la construcción de conocimientos y precisiones técnicas, dialogamos con los afectados y las organizaciones ambientalistas. Todos coincidieron en evaluar a la gran minería y al cambio climático son los principales agentes destructores de este patrimonio.

Cuadro 1: Glaciares y cambio climático.

El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) expresa claramente que *“los glaciares se forman bajo condiciones ambientales únicas y de alta fragilidad, cualquier acción que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes, impacta su vulnerabilidad, poniendo en riesgo a los ecosistemas de montaña y a la población que se abastece de ellos....”*.

De forma acelerada, el calentamiento global está elevando anualmente la isoterma de 0 grado, llevando a los glaciares a una incesante pérdida por adelgazamiento y retracción que supera en promedio el 30% de su volumen para el 87% de los casos estudiados. Muchos han desaparecido, especialmente en la zona de los glaciares tropicales andinos. Al mismo tiempo, el cambio climático está generando una disminución progresiva de las precipitaciones, que redundan en menor cantidad de nieve sobre el glaciar y reducción del caudal de las cuencas hídricas, cada vez más dependientes del derretimiento de los hielos milenarios. Tal es el caso de las cuencas del oeste argentino, donde el 70% del territorio es árido.

Fuente: Elaboración propia.

En base a los antecedentes recopilados, el equipo parlamentario consensuó un Proyecto de Ley ajustado a las condiciones de legalidad que establece la Constitución Nacional (sancionada en 1994); y que respecto a los bienes naturales fija dos cuestiones básicas:

- a) Artículo 124, Los estados provinciales tienen el dominio originario sobre sus recursos naturales; y

³ Cabe agradecer por este intenso trabajo a todo el equipo de apoyo y en especial, a las compañeras asesoras de mi despacho, como la abogada Andrea Burucúa (N. de la A.).

b) Artículo 41, que establece los principios fundamentales del derecho ambiental, y las responsabilidades del gobierno nacional

- Derecho de los habitantes a un Ambiente Sano;
- Las actividades productivas para satisfacer las necesidades actuales no deben comprometer las de generaciones futuras;
- El daño ambiental, genera prioritariamente la obligación de recomponer;
- La obligación de las autoridades de proteger la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, el derecho a la información y a la educación ambiental.
- La atribución del gobierno Nacional de dictar normas que contengan los presupuestos mínimos para la protección de estos principios y derechos. Las Provincias las pueden complementar.

Estas disposiciones dejan claramente establecido que, si bien el dominio de los “recursos” que corresponde a las Provincias (y no a los gobernadores como algunos creen), es la Nación la que debe dictar los presupuestos mínimos, no restricciones menores, sino presupuestos básicos para proteger bienes y derechos, asegurando la utilización racional de los recursos y las condiciones que permitan su preservación durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones.

3. El debate público y el rol de los distintos actores en la discusión de la Ley

La propuesta legislativa fue presentada a expertos, asesores, organizaciones e incluso algunas instituciones públicas, como la Comisión de Medio Ambiente y la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, donde obtuvo una opinión muy favorable.

En el año 2008, la ley fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y sancionada bajo el número 26.418. Pero su aprobación no pasó inadvertida por las empresas mineras, que negociaron con la Presidenta Cristina Kirchner el Veto total a la Ley.

Para todos los actores, este acuerdo gobierno/empresa fue tan evidente, que el propio Director del INTI –Instituto Nacional de Tecnología Industrial- habló públicamente del Veto como “el veto Barrick Gold”. Tal giro político generó mucha indignación en todos los actores que participaron de la elaboración de la ley, particularmente entre las comunidades amenazadas o directamente afectadas por la insuficiencia de agua y los distintos impactos ocasionados por la megaminería.

El Congreso podía insistir en el texto de la ley original, pero requería 2/3 de los votos. Ahora muy difíciles de lograr. El sector oficialista no se opondría a la voluntad presidencial. Había pocas esperanzas de reflotar la ley. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el veto produjo un efecto inesperado: popularizó el debate que hasta entonces se había transcurrido entre especialistas y afectados directos. A partir de entonces, proliferó una seguidilla de encuentros, foros, jornadas, charlas y entrevistas destinadas a informar y comprometer el apoyo social.

La polémica contribuyó a la difusión y socialización de una perspectiva más profunda sobre la importancia de los glaciares, más allá de su atractivo turístico. Además de la información técnica, fue posible instalar en la discusión pública el conflicto de intereses entre las empresas mineras y sus aliados políticos, por una parte; y el derecho de los pueblos al agua y la vida, por otra. Así se acuñó la frase “El agua vale más que el oro”. Los medios de comunicación del interior del país ayudaron a darle visibilidad al debate e incluso varios periodistas prestigiosos de medios nacionales colaboraron decididamente. A partir de entonces, la discusión sobre los glaciares pasó a ocupar portadas y editoriales en la prensa escrita, en TV y en distintos medios.

Cientos de ONGs contribuyeron a la difusión, incluso con una muy exitosa campaña de firmas a favor de la Ley. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y sus asociados, trabajaron a favor de la Ley, reconociendo en ella una herramienta de apoyo a sus luchas y demandas.

En ese escenario el diputado Miguel Bonasso volvió a presentar el proyecto original, en tanto el Senador Daniel Filmus promovía algunas modificaciones que favorecían a las empresas⁴. Finalmente se aprobó el proyecto original con algunas mejoras en particular estableciendo el vínculo glaciares/Cambio Climático.

El gobierno nacional, ante la inminencia de la nueva sanción en medio del masivo apoyo popular, optó por no volver a vetarla y en cambio trabajó con los gobernadores provinciales y las empresas mineras, para presentar leyes provinciales permisivas (sancionadas en apenas 48 horas) y urdir el cuestionamiento en tribunales sobre la constitucionalidad de la ley, que, supuestamente, violentaba los derechos provinciales.

Pese a todas las adversidades, a fines de Septiembre de 2010 el Parlamento aprobó la Ley de protección de Glaciares y sancionada bajo el número 26.639

4. Descripción del nuevo marco normativo

En síntesis, la Ley de Glaciares establece las siguientes disposiciones:

- a) Define qué es un glaciar y un ambiente periglacial, con criterios científicos universalmente aceptados y amplios
- b) Ordena a un ente público, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), la realización del Inventario de Glaciares y su actualización cada 5 años.
- c) Establece la prohibición de realizar en la zona glaciar y periglacial actividades que impliquen su traslado, desvío, contaminación, destrucción o que interfieran en su avance, específicamente:
 - liberación de sustancias contaminantes,
 - obras de arquitectura o infraestructura,
 - exploración y explotación minera e hidrocarburíferas,
 - instalación de industrias.

⁴ Para entonces, mi período como legisladora había finalizado (N. de la A.).

- d) Dispone que todas las actividades permitidas en la zona, además del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), deberán someterse a la Evaluación Ambiental Estratégica.
- e) Establece las responsabilidades de la Autoridad Competente (las Provincias) y de la Autoridad de Aplicación (la Nación).
- f) Fija un régimen de sanciones para los infractores,
- g) Dispone la realización de auditorías sobre los emprendimientos que estén ejecutando actividades prohibidas en la zona glaciar, a efecto de verificar si los afectan y de que manera⁵.

5. Acciones y propuestas para la protección de glaciares y la justicia climática

Sin lugar a dudas, la nueva Ley de Glaciares es un triunfo de las luchas de la ciudadanía, a pesar de las adversidades y su fracaso inicial. Hasta lo que sabemos, este cuerpo normativo es único en el mundo y parece ser la medida más concreta tomada hasta el presente por Argentina en relación a los desafíos por el cambio climático y aunque pueda ser perfectible y hasta insuficiente, es también un valioso instrumento legal para avanzar en el reconocimiento del derecho ambiental.

La Ley enfrenta intereses y presiones muy fuertes que ponen en riesgo nuestras vidas, nuestros bienes, nuestra tierra y nuestra soberanía, y se sostienen en una trama de complicidades políticas y mediáticas difíciles de penetrar.

Pero su aprobación nos demuestra que es posible seguir abriendo caminos para visibilizar, comprometer, difundir, socializar, sumar, presionar. Todavía podemos ampliar el horizonte. Para ello, necesitamos desarrollar estrategias alternativas, desde el lugar que ocupamos.

La educación es un campo extraordinario⁶. Es fundamental democratizar la información y el conocimiento, no sólo en la circulación de saberes significativos, sino también en las formas de comunicar, compartir lenguajes, reconocer la problemática social, aportar herramientas para su comprensión y para las luchas populares.

También es preciso trabajar para que las propuestas de nuestros gobiernos en el ALBA o en el G77 sean relevantes. La inclusión por parte de la ONU del Derecho Humano al agua potable y al saneamiento impulsada por Evo Morales, es la demostración de que la cuestión no se reduce a que las propuestas vengan de países grandes y poderosos. Tenemos inmejorables condiciones para tejer estrategias conjuntas en América Latina. Si no nos resignamos, si aunamos esfuerzos tenemos posibilidades. Es también una cuestión de convicciones y no solo de poder.

⁵ Las disposiciones contenidas en los puntos (c) y (g) son las más resistidas por las empresas mineras. De los EIA presentados y aprobados para esos emprendimientos, resulta posible establecer si efectivamente están o no operando sobre glaciares, porque no lo declaran. Por ello se ordenan las auditorías, lo que genera el conflicto. Sin embargo los informes satelitales y las denuncias de los trabajadores y afectados permiten establecer con un grado alto de certeza que están afectando a los glaciares. (N. de la A.).

⁶ Por más de 20 años, CTERA ha impulsado la formación ambiental de los docentes. Se han calificado más de 40.000 persona, lo que ha sido un paso también extraordinario.

También en materia científica y tecnológica, necesitamos generar alianzas para construir y difundir conocimientos, saberes y tecnologías en favor de la gente, recuperando el conocimiento que ha sido secuestrado en favor de los intereses económicos. En este sentido he visto como los pueblos originarios con modestísimos recursos dirigen el agua de las lluvias o los deshielos hacia los acuíferos. Tal es el caso de la llamada “siembra de agua” por parte de comunidades que a fuerza de apilar piedras, conducen esas aguas hacia las rocas porosas, drenándola hacia los acuíferos como forma de reserva. Otros plantean generar grandes depósitos como lagos artificiales protegidos con geomembranas. Es importante, indispensable evitar que el agua de los glaciares termine elevando el nivel de los mares, desalinizándolos y generando una catarata de nuevos problemas en los ambientes marinos, en las costas y en la vida de todos. Necesitamos soluciones urgentes. La ley de glaciares puede demorar el derretimiento, pero si no actuamos sobre el Calentamiento global, tarde o temprano van a derretirse y estamos obligados a buscar alternativas.

En definitiva, necesitamos construir consenso social y apoyo popular no sólo para abordar las consecuencias, sino las causas, del desastre ambiental. Sabemos que la injusticia ambiental está en la base del conflicto. Estamos a tiempo para trabajar en la dirección correcta.

GLACIARES: PROPUESTAS DE PROTECCIÓN Y AVANCES FRUTO DE LA INCIDENCIA CIUDADANA

Sara Larraín,
Chile Sustentable, Chile

A partir de los fuertes debates iniciados en el país sobre la intervención de glaciares por parte de las empresas mineras y la urgencia de su protección a raíz de la aprobación del proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold, en la región de Atacama en 2004 durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Programa Chile Sustentable inició el año 2005 un estudio en orden a la elaboración de una propuesta de ley para proteger los glaciares del impacto de actividades humanas, como la minería.

Dentro de las acciones desarrolladas para el logro de este objetivo se inició la recopilación y estudio de la información existente sobre los glaciares chilenos¹, el estatus jurídico de estas masas de hielo en la legislación internacional², la argumentación sobre los impactos globales y locales que los afectan y los servicios ambientales que proveen a la sociedad y a los ecosistemas.

1. Acuerdo de Chagual

Con el fin de visibilizar este tema en la agenda política, y en el contexto de las campañas presidenciales durante 2005, las organizaciones ambientales y ecologistas incluyeron la protección de los glaciares como una de las principales demandas ambientales a los candidatos a la presidencia de la República, expresados en el documento “Agenda Ambiental de ONG Ecologistas y Ambientalistas: prioridades para el periodo 2006-2010”. Luego de entregadas y explicadas estas demandas a todos los candidatos a mediados de 2005, se logró concretar con Michelle Bachelet en el mes de octubre, un acuerdo programático específico de 10 Compromisos para la Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo Nacional, denominado Acuerdo de Chagual, el que fue oficializado el 21 de noviembre de 2005 en el jardín botánico Chagual en la ciudad de Santiago. El Acuerdo de Chagual incluyó:

1. Enviar al Parlamento, al terminar el primer año de gobierno, las reformas a la Ley 19.300 para la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
 - Crear durante el mandato, una Subsecretaría de Recursos Naturales y Biodiversidad (dependiente del Ministerio) a cargo de articular las políticas y programas sectoriales para el uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. CONAMA pasaría a constituirse en una Subsecretaría de Gestión Ambiental.
 - Generar una autoridad ambiental municipal articulada con el Ministerio del Medio Ambiente, a fin de que los gobiernos comunales tengan una política ambiental local.

¹ Dicha investigación estuvo sustancialmente a cargo de Roxana Bórquez, investigadora asociada, y correspondió a parte de su memoria de título como Ingeniera en Recursos Naturales.

² Los antecedentes fueron aportados por el abogado Juan Carlos Urquidí y Sara Larraín de Chile Sustentable.

2. Crear una Superintendencia Ambiental orientada al fortalecimiento del rol fiscalizador del Estado, reducir la discrecionalidad y asegurar la probidad funcionaria.
3. Formular y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios, las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el territorio.
4. Establecer durante el mandato un Sistema de Cuentas Ambientales que incluya: cuentas de capital natural, rentas existentes por recursos naturales (agua, minería, tierra) e indicadores sobre cantidad y calidad.
5. Establecer durante el mandato 2 líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental: a) Reorientar subsidios y mecanismos de fomento, b) Reformular instrumentos económicos existentes para internalizar costos y prevenir pasivos ambientales.
6. Ampliar el Fondo Ambiental (Ley 19.300) a un monto anual de 5 millones de dólares (20 millones de dólares durante el mandato), para investigación y acción ambiental. El Fondo estaría orientado a apoyar centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil.
7. No incluir la opción nuclear en la política energética nacional.
8. No abrir el país a los cultivos transgénicos comerciales, y establecer el requisito de Estudios de Impacto Ambiental para la actual reproducción de semillas transgénicas.
9. Proteger los glaciares, y no aprobar su remoción y/o destrucción.
10. Establecer un Servicio Nacional de Parques Nacionales que se haga cargo de las áreas protegidas públicas, articulándose también con las áreas protegidas privadas.

En particular, el noveno compromiso del Acuerdo de Chagual, realizado entre dirigentes de organizaciones ecologistas y la Presidenta Bachelet durante la campaña electoral en 2005, estableció la responsabilidad de su gobierno de “Proteger los glaciares y no aprobar su remoción y/ o destrucción”. La meta de cumplimiento establecida con la Secretaria General de la Presidencia SEGPRES, respecto de este Acuerdo fue el envío al Congreso Nacional, por parte del gobierno, de una ley para la Protección de Glaciares como reservas de agua dulce y recarga hídrica de las cuencas.

Pasadas las elecciones, en abril del año 2006, al iniciar la implementación de la agenda comprometida con el gobierno electo de Michelle Bachelet, las organizaciones ambientales y ecologistas en el marco de un trabajo conjunto en orden a concretar el Acuerdo de Chagual y en específico el acuerdo N° 9, se comprometieron con la SEGPRES a formular un Proyecto de Ley de Protección de Glaciares y a entregar dicho texto al gobierno, para que el Ejecutivo patrocinara la propuesta y la enviara como Proyecto de Ley al Congreso Nacional para su discusión y tramitación.

Para tal efecto, el Programa Chile Sustentable estableció un grupo de trabajo en conjunto con la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, su Fiscalía y las Comisiones de Riego y de Medioambiente de la SNA para el estudio y elaboración de un Proyecto de Ley para la Protección de los Glaciares. Ello, tomando como base la información científica existente, y los conceptos y principios del marco jurídico sobre protección del patrimonio ambiental vigente en el país. También formaron parte del grupo de trabajo un abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), el coordinador del Departamento de Medio Ambiente del Ejército, y el director y el geógrafo jefe del Instituto Geográfico Militar, estos dos últimos aportaron sus perspectivas y experiencia sobre información geográfica y geo-referenciamiento de glaciares en la cartografía sobre el territorio nacional.

El grupo de trabajo³ funcionó en base a reuniones quincenales durante el año 2006, periodo en el cual se analizó la información, propuestas y recomendaciones del mundo científico, de las asociaciones de usuarios de recursos hídricos, las Mociones Parlamentarias para la Protección de Glaciares⁴ y la legislación internacional existente para la protección de estos cuerpos de hielo. Finalmente, el grupo de trabajo procedió a la redacción del texto del Proyecto de Ley.

2. Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares

Concluida su labor, el grupo de trabajo entregó la propuesta “Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares” a la SEGPRES, el 30 de octubre de 2006, a partir de lo cual se inició una ronda de presentaciones a diversas instituciones públicas, entre las que cabe destacar: la Comisión Nacional de Medioambiente; la Dirección General de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas (31.10.06); el Ministerio de Agricultura (14.12.2006); el Ministerio de Minería y Energía (03.01.2007); así como el Ministerio de Defensa (22.01.2007); para luego dar inicio a las presentaciones ante diversas organizaciones gremiales y ciudadanas.

La entrega oficial del Proyecto de Ley a la Ministra de SEGPRES, Paulina Veloso, se realizó el 11 de enero de 2007, junto a los estudios técnicos y sobre legislación comparada que lo sustentan⁵. En dicha reunión se reiteró la solicitud formal al gobierno para el patrocinio del proyecto de ley.

Simultáneamente a dicha entrega, Chile Sustentable y la SNA publicaron un libro con los antecedentes que fundamentan la necesidad de proteger los glaciares en Chile, los que incluyeron, entre otros, el catastro científico de los glaciares chilenos, el estado de algunos de estos glaciares a consecuencia del cambio climático, y los impactos que ejercen sobre

³ Miembros permanentes del Grupo de Trabajo de Protección de Glaciares: Roxana Bórquez y Sara Larraín (Programa Chile Sustentable); Rodrigo Polanco (Fiscalía del Medioambiente); Coronel Roberto Bravo y geógrafo Herman Manríquez (Instituto Geográfico Militar); Coronel Luis Olivares y María Angélica Mardones (Departamento de Medioambiente del Ejército); Eduardo Riesco, Juan Carlos Urquidí y Javier Carvallo (Sociedad Nacional de Agricultura).

⁴ Mociones del diputado Leopoldo Sánchez, presentada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en 2005; y moción del senador Antonio Horvath, presentada a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado en 2006.

⁵ Institución que maneja la agenda legislativa del poder ejecutivo, y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional.

⁶ Síntesis de la propuesta y Texto de Ley en ANEXO 10

ellos las actividades mineras, tanto en la zona norte y centro del país. Dicho texto fue dado a conocer a la opinión pública en la sede de la SNA, el 25 de abril de 2007⁷ y distribuido al Congreso, al gobierno y a las organizaciones ciudadanas.

No obstante, el cumplimiento del compromiso por parte de las organizaciones ecologistas, el gobierno no avanzó en su compromiso de patrocinar el Proyecto de Ley, principalmente debido a las presiones ejercidas por las empresas del sector minero (y actores económicos y políticos vinculados a éstas) con el fin de inviabilizar el Proyecto de Ley. En este contexto, y ante la demora del su envío del Proyecto de Ley al Congreso Nacional, y la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para patrocinar el Proyecto de Ley, las organizaciones ambientalistas y ecologistas procedieron a realizar un trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, la cual a la fecha discutía una moción de los Senadores Antonio Horvath y Alejandro Navarro con el mismo objetivo. Realizadas las presentaciones en dicha Comisión, los senadores Horvath, Allamand, Navarro y Stange, procedieron a incorporar los planteamientos del Proyecto de Ley de los grupos ambientalistas y ecologistas como de la SNA⁸, los cuales quedaron consignados en el Boletín N° 4205-12 del 2 de abril de 2007.

Terminada la discusión general del proyecto de ley en dicha Comisión, pasó a la Sala del Senado, siendo aprobada por unanimidad, volviendo luego a la Comisión para su discusión y aprobación en particular. Sin embargo, dicha tramitación no se inició debido a la falta de patrocinio del gobierno (requisito necesario cuando se involucra financiamiento), a pesar del apoyo transversal a dicho proyecto por parte de senadores de la Alianza y de la Concertación.

El Proyecto de Ley elaborado por organizaciones ambientalistas y ecologistas, del gremio agrícola e instituciones de la Defensa Nacional tiene por objeto: regular la protección de los glaciares, como factores y objetos de seguridad estratégica en la provisión de agua dulce a las cuencas hidrográficas; asegurar el mantenimiento de los ecosistemas; abastecer a las poblaciones humanas y a las actividades productivas, en especial a la producción agrícola, preservando los valores ambientales, escénicos y los servicios ambientales que los glaciares prestan para la conservación de la biodiversidad.

El Proyecto de Ley previene acciones antrópicas que puedan afectar los glaciares, con el fin de mantenerlos como reservas hídricas y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, caudales y napas subterráneas en épocas de verano y períodos de sequía.

En la elaboración del Proyecto de Ley se consideraron todas las propuestas y mociones parlamentarias existentes sobre el tema, como la del diputado Leopoldo Sánchez, ingresadas a través de la Comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en 2005 y la moción del senador Antonio Horvath, ingresadas a través de la Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado en 2006.

⁷ www.lasegunda.com, 25 de abril 2007; www.elmercurio.cl, 26 de abril 2007; www.lanacion.cl, 26 de abril 2007.

⁸ Ver indicaciones de senadores en ANEXO 11.

En cuanto a las fuentes legales y reglamentarias que inspira e integra el Proyecto de Ley, sin excluir otras, cabe destacar los ocho cuerpos legales de mayor relevancia para los objetivos del Proyecto:

- a) Ley N°19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente;
- b) Ley N°18.362, crea Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado;
- c) Ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales;
- d) DFL N°1 de 26 de julio de 2006, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, texto coordinado, refundido y sistematizado de la Ley N° 18.695 de 31 de marzo de 1988;
- e) Código de Minería;
- f) Decreto Supremo N°718 de 1977, “Crea Comisión Mixta de Agricultura y Urbanismo” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
- g) Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, suscrita en Washington, el 12 de octubre de 1940; y
- h) Convención de Cambio Climático, suscrita en Río de Janeiro, el 13 de junio de 1992 y ratificada por el Congreso Nacional en 1994.

El contenido y estructura del Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares considera 20 artículos distribuidos en tres títulos, como asimismo dos artículos transitorios. Su contenido es el siguiente:

- Objetivo de la ley, definición, clasificación y registro nacional de glaciares en el título primero.
- Ámbito de protección, actividades prohibidas, actividades restringidas y actividades permitidas, infracciones y sanciones en el título segundo.
- Consejo Nacional de Glaciares, atribuciones, facultades, secretaría, obligaciones, recursos, fiscalización y vigencia de la ley en el título tercero.
- Catastro provisorio de glaciares y actual intervención de glaciares en los artículos transitorios.

Cuadro 1: Contenido del Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares

Título I: Artículo 1°.- Objeto de la ley. Artículo 2°.- Definición de glaciar. Artículo 3°.- Clasificación de glaciares. Artículo 4°.- Registro nacional de glaciares. Artículo 5°.- Información registrada.	Título II Artículo 6°.- Ámbito de protección Artículo 7°.- Actividades prohibidas en glaciares Artículo 8°.- Actividades permitidas en glaciares. Artículo 9°.- Actividades restringidas en glaciares. Artículo 10°.- Infracciones y sanciones Artículo 11°.- Acción popular.
Título III Artículo 12°.- Conformación consejo nacional de glaciares. Artículo 13°.- Atribuciones del consejo nacional de glaciares. Artículo 14°.- Facultades del consejo nacional de glaciares. Artículo 15°.- Secretaría técnica del consejo nacional de glaciares. Artículo 16°.- Cooperación de servicios públicos. Artículo 17°.- Obligaciones complementarias de servicios públicos. Artículo 18°.- Recursos presupuestarios. Artículo 19°.- Fiscalización cumplimiento de la ley. Artículo 20°.- Vigencia de la ley.	
Artículos transitorios Artículo 1°.- Registro provisorio de glaciares. Artículo 2°.- Intervención actual en glaciares.	

Fuente: Chile Sustentable-Propuesta de Ley para la Protección de los Glaciares en Chile, en “Glaciares Chilenos: Reservas Estratégicas de Agua Dulce para la Sociedad, los Ecosistemas y la Economía”, pp. 89 -Santiago, Chile- noviembre 2006.

La institucionalidad a cargo de este nuevo ente jurídico es un Organismo Especializado, con atribución directa sobre la protección de los glaciares y dedicación exclusiva: el Consejo Nacional de Glaciares, organismo de representación público-privada y atribuciones para:

- a) Crear, actualizar y mantener el Registro Nacional de Glaciares;
- b) Monitorear el estado de los glaciares y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran;
- c) Mejorar el nivel de conocimiento nacional acerca de la influencia del Cambio Climático sobre los glaciares;
- d) Elaborar normas de conservación, protección y restauración de los glaciares;
- e) Proponer al Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes para reglamentar el acceso a los glaciares, como para la mejor vigilancia y conservación de los mismos;
- f) Proponer al Gobierno el o los Reglamentos que deban dictarse para el cumplimiento de la presente ley;
- g) Elaborar un informe tri anual sobre el estado de los glaciares;
- h) Informar los proyectos o actividad que se realicen sobre glaciares o afecte su ecosistema;
- i) Autorizar proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o afecten su ecosistema; y
- j) Fiscalizar el cumplimiento de la ley.

El Proyecto de Ley presenta estrecha relación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo actividades prohibidas, permitidas y restringidas respecto de los glaciares. Con relación a esta última categoría de actividades restringidas, ellas requerirán sometimiento previo y resolución favorable a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a las normas de la Ley N° 19.300 para áreas protegidas.

Con el fin de prevenir los impactos de actividades antrópicas, el Proyecto de Ley exige estudios de impacto ambiental para la realización de las siguientes actividades en glaciares:

- a) Actividad científica realizada con el auxilio de medios mecanizados de transporte, o con obtención de muestras de sondajes mecanizados, o que deje indefinidamente materiales en los glaciares;
- b) Actividad turística, ecoturística o deportiva realizada a pie o sobre esquís;
- c) Actividades de remoción de depósitos de cenizas y desechos de cualquier tipo que afecten a los glaciares;
- d) Construcción de obras hidráulicas para riego o generación eléctrica que, en la misma cuenca u hoya hidrográfica, disten a menos de 3 Km. del margen de un glaciar;
- e) Ejecución de labores mineras o industriales distantes a menos de 3 Km. de un glaciar, o que estando a mayor distancia depositen o acumulen material particulado en la superficie del glaciar; o que emitan vibraciones o produzcan explosiones que dañen al glaciar;
- f) En lo relativo a actividades mineras, se necesitará además del permiso escrito del Presidente de la República, otorgado en la forma descrita en el artículo N°17 -6 del Código de Minería.

El Proyecto de Ley concede al Consejo Nacional de Glaciares la facultad de fiscalizar su aplicación, sin perjuicio de las facultades legales de los organismos del Estado; y establece sanciones a las personas que causaren daño a un glaciar o afectaren de cualquier modo su integridad, considerando responsabilidades civiles, penales, administrativas y ambientales.

También contempla acción popular para denunciar las obras o trabajos que se realicen en contravención a la ley, recibiendo el denunciante, como premio, el 20% del producto de la multa que se aplique.

3. Avances en la acción regulatoria para la protección de glaciares

Si bien el gobierno de Michelle Bachelet aceptó inicialmente elaborar y patrocinar una Ley de Protección de Glaciares, y creó un grupo de trabajo interministerial, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), para analizar técnicamente el proyecto presentado por los ecologistas y la SNA; posteriormente no cumplió con el acuerdo de patrocinar dicha propuesta legal y enviarla al Congreso Nacional para su tramitación.

Lo anterior debido principalmente a la presión de los gremios mineros, entre los cuales cabe destacar al Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), y las empresas Codelco, Pelambres, Barrick y AngloAmerican, todas las cuales se encontraban interviniendo y destruyendo glaciares a la fecha de presentación del Proyecto de Ley; y que hoy continúan interviniendo estas reservas de agua dulce.

Al respecto, debe destacarse que la oposición de la empresa estatal CODELCO, en alianza con las grandes mineras privadas, constituyó un frente común que logró anteponer frente al poder Ejecutivo los intereses individuales de tales empresas privadas, en desmedro de la seguridad hídrica, el patrimonio ambiental y el desarrollo armónico del país. Aunque el mandato de la Constitución Política del Estado, el resguardo del patrimonio ambiental de Chile.

No obstante, el desahucio a la Ley y a la promesa de legislar al respecto, en el marco de la elaboración presupuestaria 2007, el gobierno incluyó un presupuesto adicional de 600 millones de pesos para la Dirección General de Aguas, con el objeto de que dicha institución iniciara en el año 2008, el estudio y monitoreo de los glaciares existentes en el territorio nacional.

Simultáneamente en dicho período el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), máxima autoridad de la institucionalidad ambiental en la época, aprobó el 28 de mayo de 2008, la propuesta de la Ministra Presidenta de CONAMA, de incluir tres acuerdos que significaron un avance en la materia:

a) Acuerdo N° 379/2008: Un Plan de Trabajo para la Política Nacional de Glaciares⁹.

⁹ Acuerdo N° 379/2008: El Consejo Directivo de CONAMA, considerando lo dispuesto en el artículo 70, letras a) y c); el artículo 72, letra a); y el artículo 76, letra b) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y d) el Acuerdo 353 del 18 de octubre de 2007 del Consejo Directivo y los antecedentes tenidos a la vista, acuerda: 1) Aprobar un Plan de Trabajo que desembocara en una propuesta sobre Política Nacional de Glaciares

- b) Acuerdo N° 380/2008: Modificación del Reglamento del SEIA de la Ley 19.300 para incluir la obligatoriedad de ingreso al SEIA mediante Estudio de Impacto Ambiental en el caso de aquellos proyectos que puedan intervenir o impactar glaciares¹⁰.
- c) Acuerdo N°381/2008: Modificación del Reglamento del Catastro Público de Aguas contenido en el Decreto Supremo N°1220 del 30 de diciembre de 1997 del MOP, para incluir un Inventario Público de Glaciares.

Aunque la elaboración y dictación de una Política Nacional de Glaciares, la creación de la Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas y la generación de un Inventario Público de Glaciares, así como la obligación de realizar Estudios de Impacto Ambiental en el caso de proyectos que pudieran afectar glaciares, sin duda constituyen avances importantes para la protección de los glaciares, las organizaciones ecologistas, miembros del Acuerdo de Chagual consideraron no cumplido el noveno compromiso de dicho Acuerdo. Ello, debido a que aunque el gobierno sí demostró voluntad política al crear y financiar la Unidad de Glaciología y Nieves en la DGA, al iniciar la elaboración del Catastro de Glaciares, al redactar y aprobar al nivel del Consejo de Ministros una Política Nacional de Glaciares; finalmente no patrocinó la Ley que concedía un estatus jurídico vinculante de protección a los glaciares, y que además establecía normas de gestión para estas reservas de agua dulce; instituía una autoridad para aprobar, prohibir y fiscalizar las actividades en ellos; y penalizar los daños e infracciones que los impacten o destruyan.

En el ámbito legal superior, el gobierno sí incluyó los glaciares, y les dio un estatus de “Bienes Nacionales de Uso Público, en el Proyecto de Reforma Constitucional para modificar el Artículo N°24 de la Constitución, con el fin de establecer también dicho estatus a nivel constitucional para las aguas; y devolver las atribuciones al Estado para la gestión pública de ambos bienes. No obstante, dicha Reforma Constitucional sólo fue enviada por el gobierno de Bachelet en enero de 2010, a tres meses de terminar el gobierno, por lo cual su tramitación fue congelada con la llegada al poder del gobierno de Sebastian Piñera a mediados de marzo de 2010. A mediados de 2011, el bloqueo a dicha iniciativa por parte del nuevo gobierno, continua.

¹⁰ Acuerdo N° 380/2008: El Consejo Directivo de CONAMA aprueba una modificación del Reglamento del SEIA contenido en el Decreto Supremo N°95/01 del 21 de agosto, 2001;

- incluyendo en el artículo 3 letra a), la obligación de realizar SEIA a: “presas drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración significativa de cuerpos o cursos naturales de aguas públicas a cargo de la DGA incluyendo a los glaciares que se encuentran incorporados como tales en un Inventario de agua”.
- Incluyendo una nueva letra a.5 en el artículo 3 que considera: “La ejecución de obras o actividades que impliquen alteración de las características del glaciar”.
- Incluir una nueva letra q) en el artículo 6 incorporando “la superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse”.
- Mandata a la CONAMA a elaborar una propuesta Guía Criterio” que explicita cómo se pondrá en práctica en el SEIA, proceder a su difusión y aprobación por el Consejo Directivo

PROTECCIÓN DE GLACIARES: POLÍTICA Y DESAFÍOS

Antonio Horvath
Senador de la República de Chile

Chile presenta una condición privilegiada respecto de sus Glaciares, ya que de los 26.000 km² que existen en América, 21.000 km² están en Chile, principalmente en Aysén y Magallanes.

Cuadro 1: Fotos glaciar O'Higgins

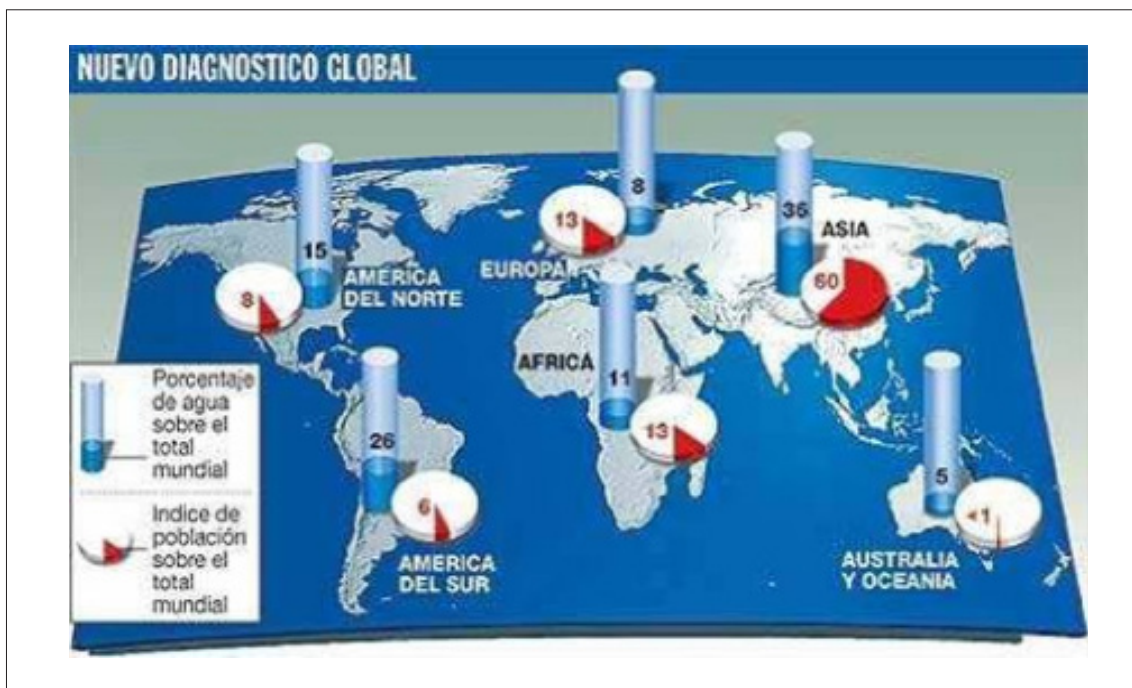


Fuente: Fotografías de Antonio Horvath.

La concepción que existe respecto de los glaciares, ha tenido cambios importantes desde la década del 60, cuando el proceso de derretimiento se asociaba a la resolución del problema de la sequía. Plantear algo así hoy día, sería un gran error. En los años 80 se planteó internacionalmente como un logro, que Chile tuviera la capacidad tecnológica de intervenir glaciares, de manera de poder extraer minerales en el entorno o debajo de ellos (actividad que se está realizando hasta el día de hoy, y sabemos que es una aberración). Desde la última década que parte el 2000, se sabe que los glaciares son ecosistemas, reservas de agua e importantes elementos de atracción turística internacional, todo lo cual está puesto en riesgo por la misma acción del hombre. Es decir, nuestra relación con los glaciares ha cambiado durante estos años.

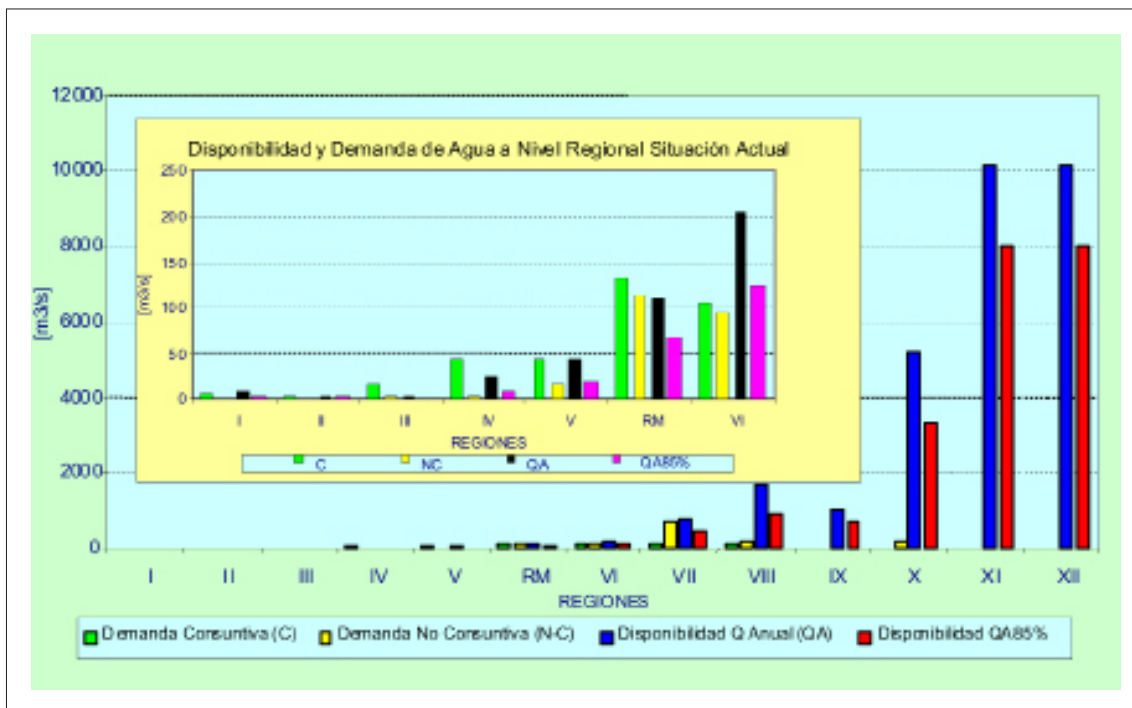
Respecto de la distribución de los Recursos Hídricos en el mundo, existe un claro desbalance sobre todo con respecto a Asia, Europa y África. Chile tiene un balance favorable en Sudamérica, es decir, tiene más agua que la que está consumiendo; pero eso no significa que en distribución esté bien. La diversidad de ecosistemas de nuestro país, muestra un desbalance, siendo en la zona norte desértica un recurso cada vez más escaso; situación que cada vez se va extendiendo hacia sur. Un dato interesante es que el agua embotellada es, hoy día, más cara que un litro de bencina y esa es la tendencia que va a continuar.

Cuadro 2: Evaluación del estado de los recursos hídricos del planeta



Fuente: Organización de Naciones Unidas, 2009.

Cuadro 3: Disponibilidad y demanda de agua a nivel regional actual



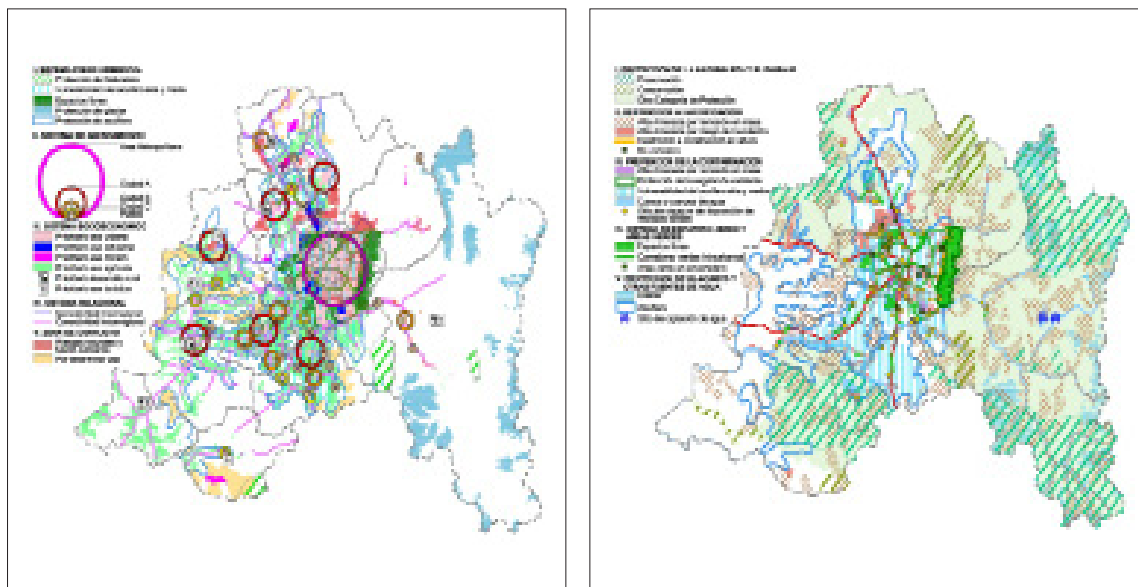
Fuente: Dirección General de Aguas.

Esta reflexión lleva de inmediato a los desafíos políticos que surgen desde los distintos intereses y valoraciones que existen con respecto al agua. Se debe considerar la Agricultura, con actividades ancestrales que hoy día se están recomponiendo, según la apertura de los mercados internacionales con sellos de producción natural y orgánica; Turismo, que es una actividad que se acrecienta cuando se cuenta con zonas atractivas. También se debe considerar la visión de la conservación, que enfrenta a la minería y a los megaproyectos energéticos, entre otros. Debido a esta gran variación de visiones, es que el proyecto de Ley sobre Protección y Valoración de los Glaciares ha avanzado lento, tratando de destrabar estos intereses encontrados. Para ello, ha habido reuniones con el Consejo Minero, con gente que está en la actividad pública y privada en estas áreas y que se han negado a todo tipo de acuerdos. No obstante, los avances que se han logrado, impulsan a seguir.

Para enfrentar el tema de la protección de los glaciares, existen varios caminos. Uno es a través de los instrumentos de planificación, tales como el Manejo Integrado de Cuencas y el Ordenamiento Territorial, ambos incorporados en la Ley de Bases del Medio Ambiente aunque no de modo vinculante. Respecto de la Zonificación del Borde Costero, hoy constituye un instrumento requerido por la legislación para poder desarrollar actividades económicas. Por ejemplo, los proyectos termoeléctricos, tienen que someterse, por Ley. Respecto de la legislación que define Caudal Ecológico en el Código de Aguas y Caudal de Pesca Recreativa, se requieren avances más sustantivos.

Un ejemplo concreto de avance desde los instrumentos de planificación es el Proyecto OTAS desarrollado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ , el cual estableció un plan de Ordenamiento Territorial para la región determinando Requerimientos ambientales a los Usos del territorio y Áreas naturales para la protección y conservación.

Cuadro 4: Proyecto OTAS
Bases para el Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago



Fuente: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Lamentablemente, así como se desarrollan iniciativas interesantes orientadas a proteger y manejar con un criterio de sustentabilidad las reservas de agua dulce para el futuro, CODELCO continúa con su plan de intervención y destrucción de glaciares.

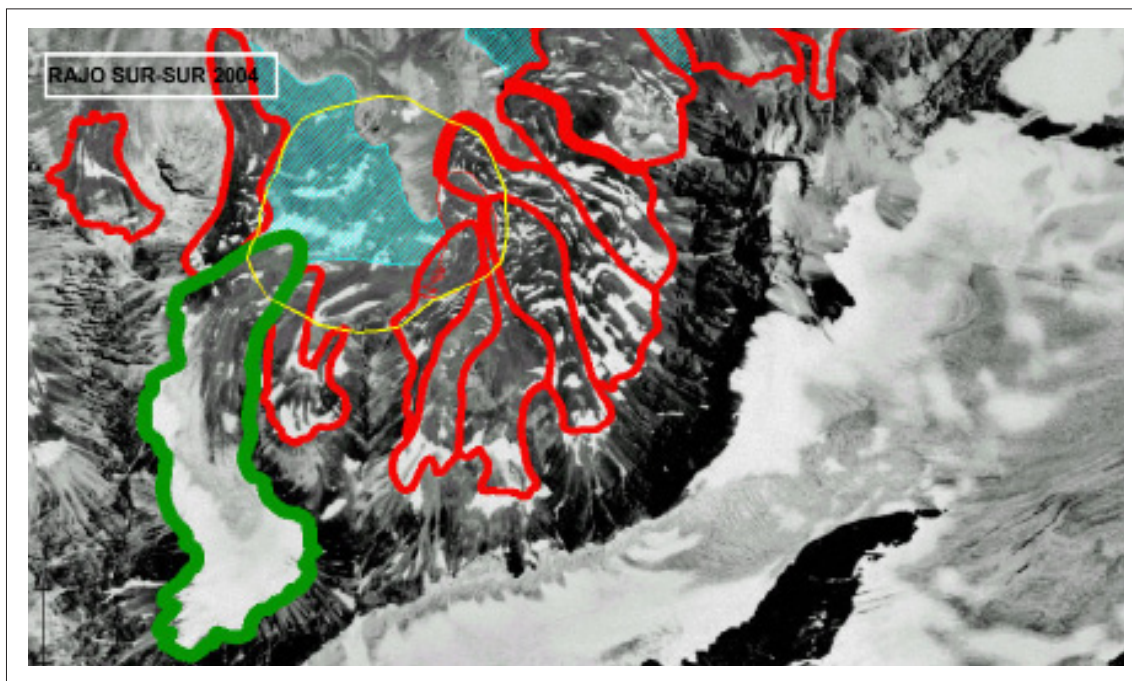
Cuadro 5: Área de intervención de glaciares Minera Andina



Fuente: Minera División Andina.

Otro ejemplo, el proyecto de Minera Andina y Los Bronces, que va a intervenir los glaciares de Roca en las cuencas del río Maipo y Aconcagua.

Cuadro 6: Glaciares Blancos y Glaciares de Roca en Sur-Sur

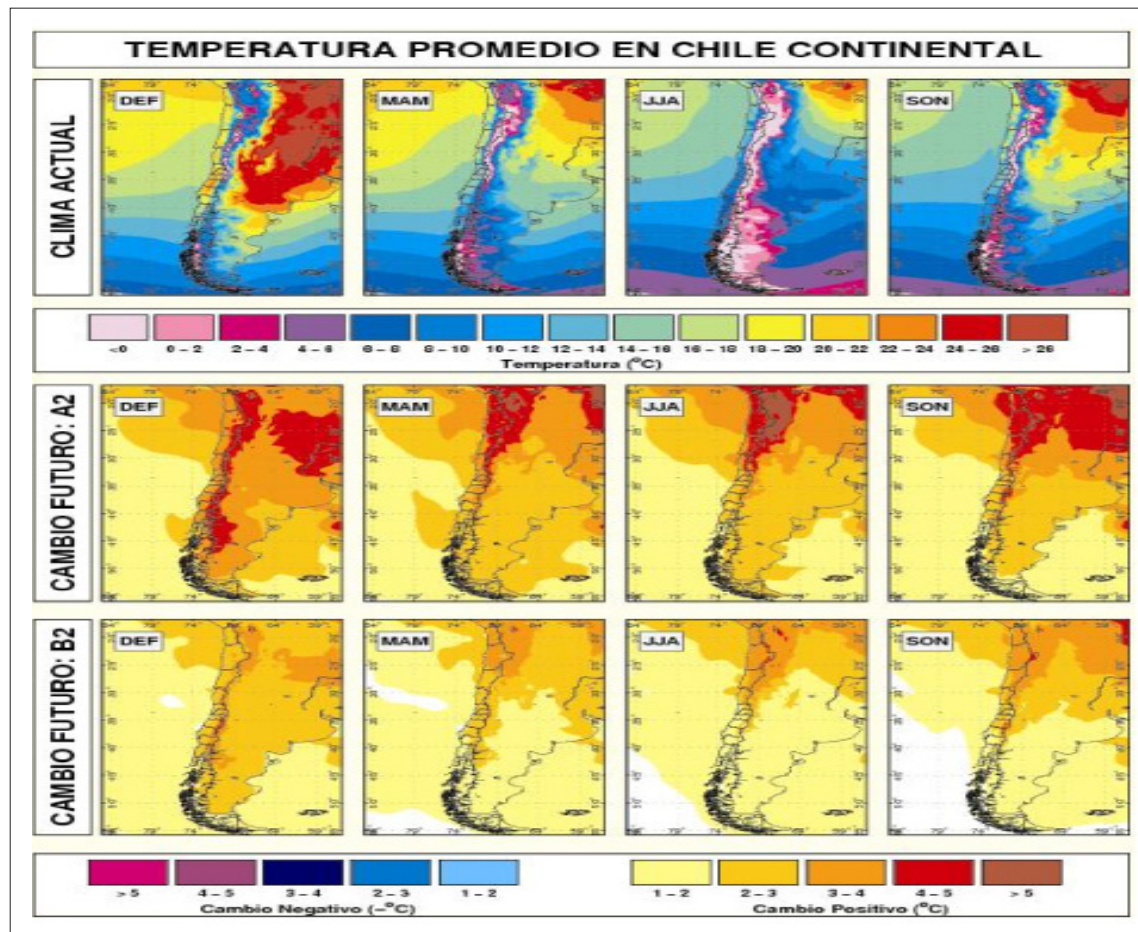


Fuente: Minera División Andina.

El Proyecto Pascua Lama es un proyecto privado compartido entre Chile y Argentina, que se emplaza en nuestra zona de Atacama y que muestra muchas irregularidades. Por ejemplo, lo que consigna la Evaluación de Impacto Ambiental respecto del inicio de faenas de instalación, el cual está sujeto a un plan de manejo de glaciares que indica el traslado de éstos de un lugar a otro. Decisiones inadecuadas han permitido poner en evidencia este proyecto aberrante. Las organizaciones que están participando esperan poder hacer conciencia respecto de este y otros proyectos que atentan contra el medio ambiente; y trabajar, al mismo tiempo, para la articulación de políticas públicas que aborden estos temas.

A estos problemas ocasionados por proyectos nocivos, se suma el fenómeno de Cambio Climático. Hay que destacar que Chile es pionero en la aplicación de un modelo internacional validado para los próximos 100 años, en cuanto a cómo van a variar las temperaturas y precipitaciones en distintos escenarios para el país. Ello tiene efectos inmediatos en el comportamiento de los ríos: por aumento de las temperaturas hay menos retención de nieve y la cantidad de agua en determinados momentos es más alta; ello genera daños al territorio por aumento de la erosión, más inundaciones y al contrario, menos disponibilidad de agua en momentos determinados. Y es lo que ya estamos viviendo.

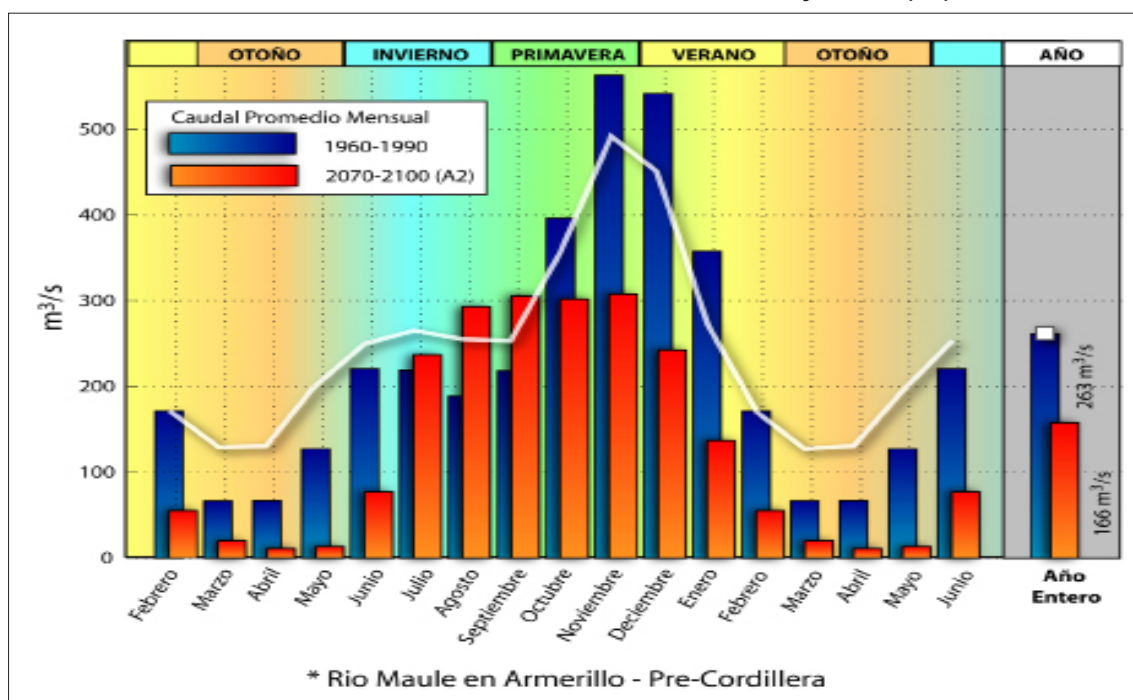
Cuadro 7: Modelo Cambio Climático 2100



Fuente: Universidad de Chile, Dpto. Geofísica.

El Cambio Climático tiene dos vías de ser enfrentado y que deben operar en paralelo, una es la internacional, los Acuerdos y otra es a nivel nacional. Por internacional se entiende una acción multilateral articulada que vaya presionando a los países para que asuman los compromisos contraídos en los protocolos de acuerdo, para reducir sus emisiones. En el ámbito nacional, se debe trabajar hacia la protección de glaciares, los ríos y sus ecosistemas; forestar; desarrollar un manejo integrado de cuencas; generar defensas fluviales y adaptarse a este nuevo escenario.

Cuadro 8: Caudal Simulado del Río Maule* Presente y Futuro (A2)

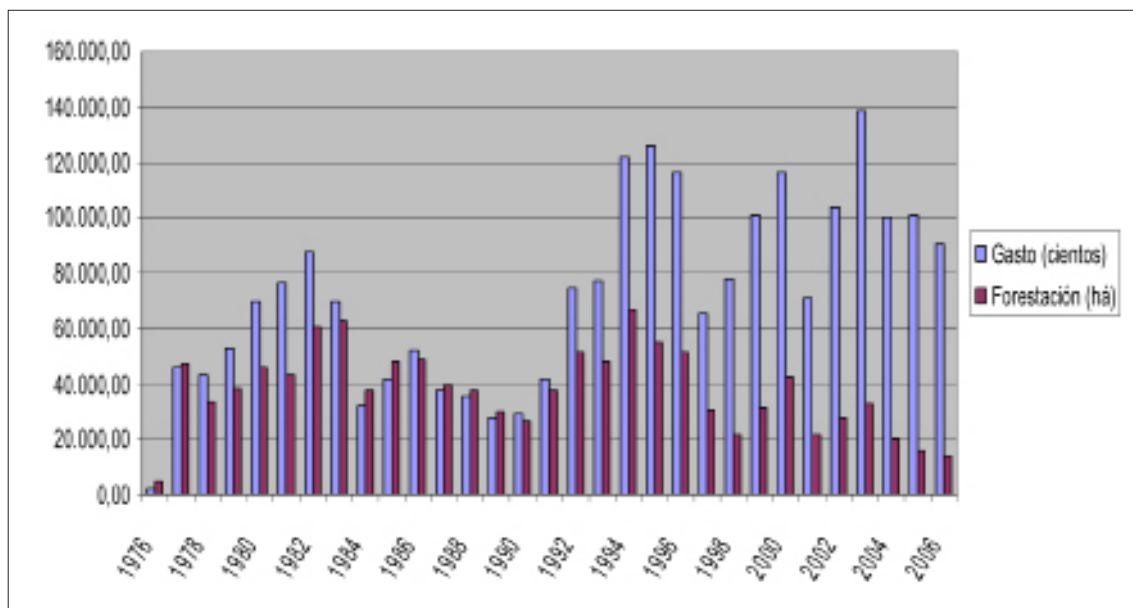


Fuente: Universidad de Chile, Dpto. Geofísica.

Desde el punto de vista del análisis climatológico, hasta hoy día la modelación buscaba largas series estadísticas para lograr una mejor aplicación predictiva y mayor validación de los diseños; pero hoy esto ya no aplica debido a que el Cambio climático hace cambios inesperados en las series estadísticas que hacen imposible manejar los mismos modelos predictivos de antes.

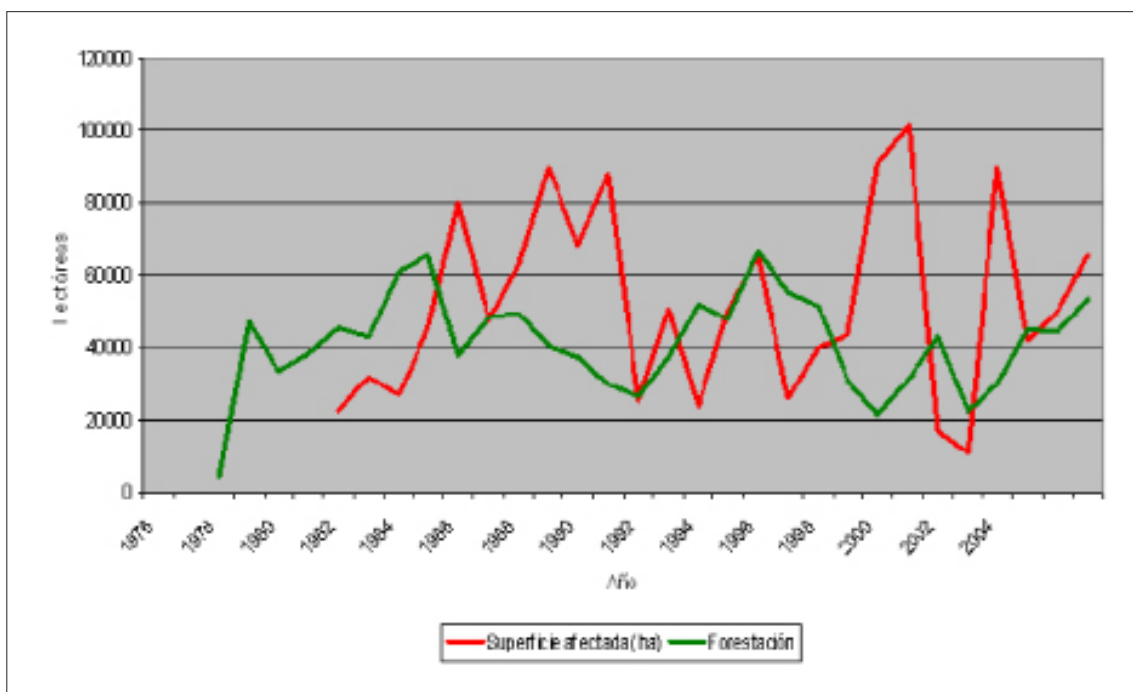
Respecto de las acciones que hoy debieran estar bien orientadas, fundamental son las actividades tendientes a aumentar la superficie forestada; al respecto, los datos indican que el gasto ha crecido, pero ha disminuido la forestación neta. Como ejemplo, el año 2005 se gastaron MU\$38 en forestar y MU\$10 en Recuperación de Suelos, sin embargo, el año 2009 es el que menos se ha forestado en los últimos 30 años. Esto se agrava porque los incendios queman más superficie de la que se foresta, y si lo que se incendia es bosque nativo, hay una caída en la calidad de la masa arbórea de calidad, lo cual es muy grave.

Cuadro 9: DL 701 - Superficie forestada y Gasto (en US \$)



Fuente: Corporación Nacional Forestal.

Cuadro 10: Superficie Afectada por v/s Forestación (ha)



Fuente: Corporación Nacional Forestal.

Todo esto lleva a tener hoy día, un panorama muy complejo en materia de retención y disponibilidad de agua, así como, en mantención de glaciares como reserva de agua dulce.

Cuadro 11: Tranque Lautaro, Río Copiapó, Atacama

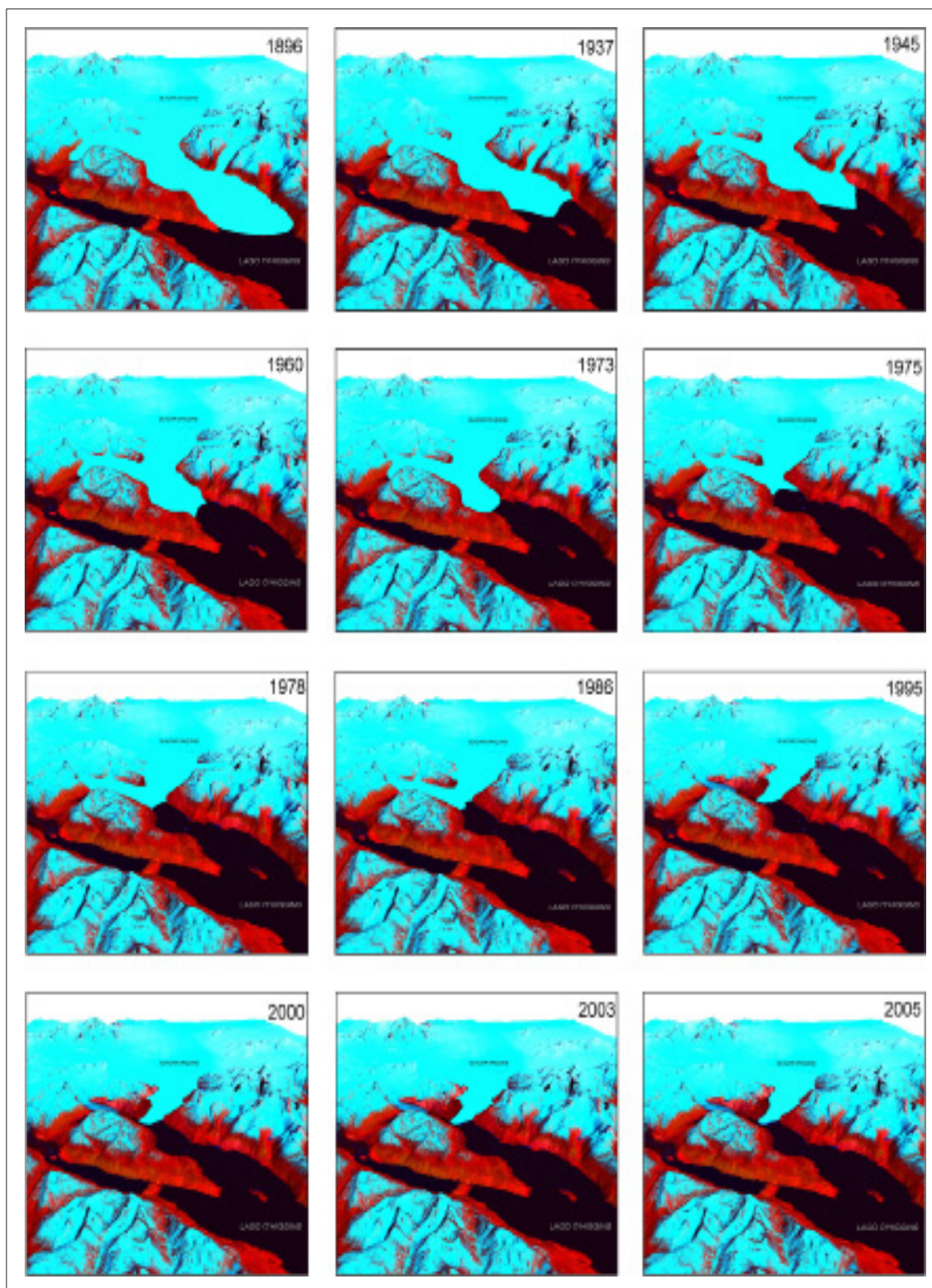


Fuente: Fotografía de Carlos Aguilar, 2007.

La imagen muestra un cambio gravísimo en el río Copiapó, al cual se le está sacando más agua de la que tiene, y hoy hay peticiones para sacar cinco veces la actual disponibilidad de agua.

Respecto de la retracción glacial, el glaciar O'Higgins constituye un muy buen caso de estudio, pues ha sido documentado desde hace muchos años. En la imagen se percibe una disminución creciente del glaciar. La gran mayoría de los glaciares están en la misma situación de disminución y los que están avanzando, es por fenómenos locales y no porque aumente la precipitación en ese sector.

Cuadro 12: Secuencia retracción Glaciar O'Higgins



Fuente: Gino Cassassa.

Cuadro 13: Inventario de glaciares

Región administrativa	Cuenca hidrográfica	Número de glaciares	Area en km ²	% de superficie con glaciares rocosos	Fuente
I	Norte Grande*	14	29.70	s/i	GARÍN (1987)
II	Norte Grande*	14	12.13	s/i	GARÍN (1987)
III	Norte Chico*	49	66.83	s/i	GARÍN (1987)
IV	Norte Chico *	11	7.02**	s/i	GARÍN (1987)
V	Aconcagua	159	121.2	s/i	BOWN et al (2008)
Metropolitana	Maipo	647	421.9	39 %***	MARANGUNIC (1979)
VI	Cachapoal	146	222.42	21%	CAVIEDES (1979)
VI	Tinguiririca	261	106.46	3%	VALDIVIA (1984)
VII	Mataquito	81	31.91	s/i	NOVEROY (1987)
VII	Maule	98	35.32	20%	COMUNICACIÓN PERSONAL G. TAPIA (DGA)
VIII	Itata	21	8.3	s/i	(ZENTENO et al. 2004)
VIII-IX	Bío Bío	29	52.37	2%	RIVERA (1989)

IX	Imperial	13	18.72	26%	RIVERA (1989)
IX-X	Toltén	14	68.48	21%	RIVERA (1989)
IX-X	Valdivia	6	42.33	25%	RIVERA (1989)
X	Bueno	11	19.35	2%	RIVERA (1989)
X	Petrohué	12	60.57	11%	RIVERA (1989)
X	Mauñín	1	2.84	0 %	RIVERA (1989)
X	Chamiza	1	1.05	0%	RIVERA (1989)
X	Volcán Michinmahuida	9	81.4	0%	ESPIZUA et al (in prep)
XI	Campo de Hielo Patagónico Norte	70	3,953	3.4	RIVERA et al. (2007)
XI-XII	Campo de Hielo Patagónico Sur	48	9,659****	s/i	ANIYA et al. (1996)
XII	Península Muñoz Gómero y Gran Campo Nevado	75	252.5	s/i	SCHNEIDER et al. (2007)
XII	Isla Riesco	45	215	s/i	CASASSA et al. (2002)
INVENTARIADOS	SUBTOTAL	1835	15,489.8		

X-XI	Chiloé Continental				
	Yantales				
	Melimoyu				
	Volcán Hudson				
	Erasmó				
	Cerro San Lorenzo				
	Cerro Blanco				
	Muchos glaciares pequeños				
					LLIBOUTRY (1956)
					CASASSA (1995)
					ANIYA et al. (1996)
					USGS (1999)
					RIVERA et al. (2000)

XI-XII	Glaciares pequeños alrededor del Campo de Hielo Patagónico Sur (sólo Chile)			1,400	RIVERA et al. (2002)
XII	Monte Sarmiento		2,500	www.glaciologia.cl	
	Isla Santa Inés				
	Cordillera Darwin				
	Isla Hoste				
	Muchos otros glaciares pequeños				
NO INVENTARIADOS	Subtotal área estimada			4,700	
INVENTARIADOS +	TOTAL CHILE		1835	20,189.8	
NO INVENTARIADOS					

Un trabajo importante que se ha estado realizando y que esta en el proyecto de ley de Protección y Valoración de los glaciares, es un inventario de glaciares que permita saber sus características y localización, tanto en lo que se refiere a los glaciares blancos como los de roca.

Cabe señalar que Chile tiene muchas cuencas compartidas con Argentina a partir de Valdivia en las cuales existen, incluso, definiciones de límites pendientes, como por ejemplo, el Monte Fitz Roy, el Cerro Alegre o el Cerro Torres. Todas ellas son maravillas desde todo punto de vista, por lo que se les esta cuidando como tal. El problemas de límites se puede prolongar en el tiempo, pero ello no debe afectar lo que verdaderamente nos interesa, que es proteger, valorar y cuidar estos glaciares para la ciencia y el turismo.

Por la vertiente occidental los glaciares se han retirado de modo importante, lo que permite hacer una senda por el denominado Parque Nacional O'Higgins (en el caso chileno) pero que es un parque en el papel. Chile tiene un 20% de áreas protegidas, de las cuales el 85% están en la zona austral. Sin embargo, la presencia de CONAF, de actividades de investigación, promoción y ciencia es muy baja y, sólo ahora se han dado a conocer debido a que producto del Cambio climático, las aguas embalsadas por estos glaciares generan rupturas rápidas que afectan a personas y a la seguridad del sector, lo cual ha incrementado la presencia de científicos en el sector.

Finalmente, respecto de la Situación Legislativa que atañe a los glaciares, las mociones que se han presentado no avanzan, porque hay intereses encontrados. En paralelo se ha logrado avanzar en la ley cuyo objetivo es que los glaciares tengan una legislación; también se han logrado negociaciones respecto de que en la nueva institucionalidad ambiental se consideren temas como, por ejemplo, que cualquier efecto negativo que pudiera llegar a los glaciares, debe tener una Evaluación de Impacto Ambiental.

Al respecto, las principales Mociones presentadas han sido:

1. Establece la prohibición de ejecutar proyectos de inversión en glaciares. Bol. 3947- Diputados L. Sánchez, R. Delmastro, A. Leal, A. Longton. Archivado
2. Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares. Bol. 4205-12 Senadores A. Horvath, C. Bianchi. G. Girardi. C. Kuschel, A. Navarro. Para Segundo Informe Comisión Medio Ambiente del Senado. En espera de indicaciones del Ejecutivo.
3. Establece normas en resguardo de los glaciares. Bol. 6308-12 Senadores N. Avila, G. Girardi, R. Muñoz, A. Navarro, C. Ominami Para Primer Informe Comisión Medio Ambiente del Senado.
4. Regionalización Recursos Naturales Bol. 6432-06 (Reforma Constitucional) Senador A. Horvath. Para Primer informe Com. de Gobierno del Senado.

Respecto de leyes importantes, cabe mencionar:

1. Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Año 2009 "Artículo 17. Prohíbese la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los glaciares, medidas en proyección horizontal en el plano."
2. Ley 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente Ley 20.417. Año 2010 Obliga a Estudio de Impacto Ambiental a proyectos emplazados en o cercanos a glaciares (Artículo 11)

EL TRATADO SOBRE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA SUSCRITO POR LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE ARGENTINA: IMPACTOS Y DESAFÍOS PARA LOS ECOSISTEMAS, LAS COMUNIDADES Y EL AGUA

Nancy Yáñez
Observatorio Ciudadano, Chile

1. Antecedentes

Hay recursos que debido a su naturaleza y ubicación, escurren fuera de la frontera de los Estados nacionales. Tal es el caso de las cuencas hídricas en sus distintas manifestaciones -vertientes, glaciares y, en general, aguas superficiales y subterráneas -, ubicadas en territorios fronterizos y transfronterizos. En materia de derecho internacional, la localización de recursos hídricos en las fronteras nacionales ha motivado el desarrollo de una amplia legislación para la regulación de su aprovechamiento, especialmente para resolver las necesidades de sectores productivos que los gobiernos reconocen como “estratégicos” para su desarrollo. Tal es el caso de la gran minería.

En la década de los ‘60 y hasta inicios de los ‘70, los países de América del Sur aspiraban a terminar con la lógica de explotación colonial de los recursos ubicados en sus territorios, dando paso a sendos procesos de nacionalización de los recursos naturales. De esta forma se aseguraba el control estatal en función de la estrategia de desarrollo de cada país. En el caso particular de la administración de recursos compartidos, es decir transfronterizos, los Estados Nacionales aspiran al cumplimiento de dos objetivos:

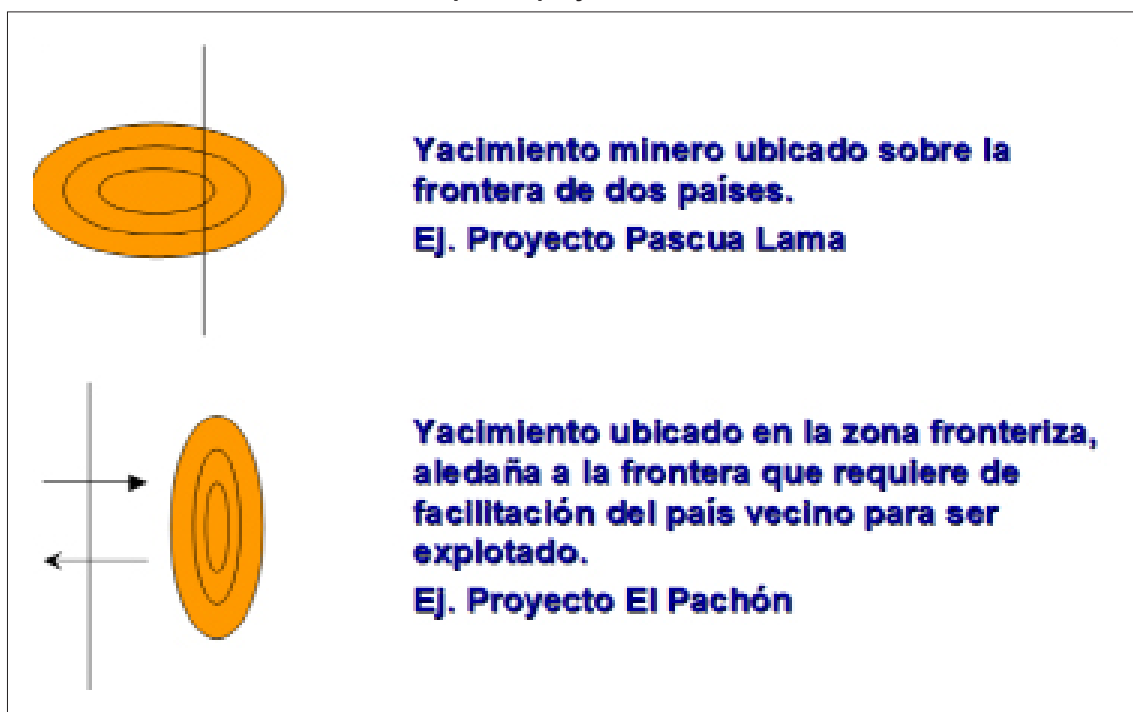
- a) Asegurar el aprovechamiento equitativo por parte de los Estados involucrados;
- b) Evitar condiciones de abuso por parte del estado con mayor poder militar o económico.

A partir de la década de los 80 hasta la fecha, como consecuencia de la emergencia del modelo neoliberal de desarrollo, la tendencia nacionalizadora ha sido revertida. Se han impulsado mecanismos de privatización de recursos naturales y la estrategia gubernamental se ha concentrado en la generación de incentivos a la inversión de grandes capitales, quienes pasan a tener el control sobre la gestión, manejo y réditos de la explotación de los recursos nacionales y transfronterizos; fenómeno que diversos sectores sociales definen como un “neo-colonialismo”.

En este escenario se enmarcan los esfuerzos binacionales y multinacionales para permitir el acceso al mercado de bienes y servicios de los recursos que se ubican en zonas fronterizas y transfronterizas, tales como recursos mineros y energéticos. Así, los gobiernos de Chile y Argentina suscriben el Tratado de Integración y Complementación Minera.

A diferencia de lo que su nombre sugiere, este acuerdo de integración y complementación no ofrece a los pueblos respectivos la posibilidad de constituir propiedad y proyectos mineros en uno u otro país. Por el contrario, obliga a cada país a permitir el ingreso de inversionistas extranjeros, favorecer la constitución de propiedad minera para sus respectivas filiales y permitir su explotación sin las trabas que surgen de la imposición de barreras (aduaneras, sanitarias, etc.) derivadas de la imposición de fronteras nacionales.

Cuadro 1: Tipos de proyectos transfronterizos



Fuente: Elaboración propia

El Tratado permite que los proyectos mineros acogidos al mismo (mediante un protocolo específico), accedan al uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura existente en cualquiera de los dos países. Por esta vía, no sólo los recursos naturales del subsuelo están disponibles para la inversión, sino todos los recursos naturales y de infraestructura que el proyecto requiera. Actualmente, los proyectos que están siendo regulados por este Tratado, son: Pascua Lama, Vicuña, Aguas Andrés, El Pachón y Las Flechas.

2. Acuerdos binacionales sobre los recursos hídricos compartidos

En su preámbulo, el Tratado de Complementación e Integración Minera considera lo establecido en el acta de Santiago sobre cuencas hidrológicas, de 26 de junio de 1971; el protocolo específico adicional sobre recursos hídricos compartidos; y en el tratado sobre medio ambiente, del 2 de agosto de 1991. Todos estos son instrumentos firmados entre Argentina y Chile, encaminados a la regulación del uso de recursos hídricos compartidos.

Dichos acuerdos han regulado la administración de aguas transfronterizas (de usos distintos a los que corresponden los usos de aguas fluviales) entre Chile y Argentina por largo tiempo. Sus premisas se recogen en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de Naciones Unidas sobre el uso de estas aguas, el año 1997¹. De allí se desprenden 4 principios fundamentales:

- a) La obligación de los estados ribereños en el uso de agua transnacional, en cuanto a no causar un perjuicio apreciable entre los estados concernidos, teniendo en cuenta que: (i) no se ponga en riesgo las actividades tradicionales que se desarrollan en aguas binacionales; y (ii) se resguarde el principio de la “debida diligencia”, es decir, que el Estado por donde escurren las aguas, ha actuado con la debida diligencia que impone un buen gobierno.
- b) El derecho al uso equitativo razonable de las aguas².
- c) La obligación de comunicar proyectos que pueden afectar los cursos de agua³.
- d) la obligación de garantizar la protección ambiental y prevenir daños ambientales.

En coherencia con estos principios, el artículo primero del convenio suscrito por los Estados de Chile y Argentina sobre recursos compartidos en el año 1971, señala que “las partes convienen en que las acciones y programas relativas al aprovechamiento de recursos hídricos compartidos, se emprenderán conforme al manejo integral de cuencas hidrográficas. El aprovechamiento de recursos hídricos en el territorio de una de las partes pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar perjuicio a los recursos hídricos compartidos en la cuenca común ni al medio ambiente”.

En el tratado de Integración y Complementación minera, por el contrario, no existe un concepto claro sobre uso de las aguas, estableciendo garantías destinadas exclusivamente al aprovechamiento de aguas para fines mineros. En el protocolo complementario al acuerdo minero, se precisa el acceso de la pequeña, mediana y gran minería a la propiedad minera en el ámbito de aplicación del tratado en el otro país; y específicamente, el uso de los recursos hídricos en los proyectos mineros. Esta medida favorece explícitamente el aprovechamiento de los recursos hídricos ubicados en la zona de operaciones del proyecto, sin considerar los principios de cuenca hidrográfica ni menos, la gestión integral de los recursos compartidos, que corresponden a un mismo ecosistema. Adicionalmente, el tratado permite la constitución de una comisión asesora empresarial, legitimando la influencia directa de este -y ningún otro- sector sobre las decisiones de interés público.

¹ La Asamblea General aprobó la Convención por 103 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones. A la fecha, dicho instrumento cuenta con la adhesión de 14 estados partes, pero aún no ha entrado en vigencia ya que se requieren 35 adhesiones. En todo caso cabe consignar que la Convención recoge la costumbre internacional, particularmente, lo establecido en la Convención de Helsinki del año 1966. (N. de la A.)

² Aparentemente, el Tratado chileno-argentino de complementación e integración minera fue acogido por los respectivos gobiernos bajo el supuesto que la explotación binacional de un yacimiento sobre recursos compartidos, era una forma de distribución equitativa y razonable de los recursos (N. de la A.).

³ Específicamente, las normas se han generado en torno a los proyectos hidroeléctricos, pero a partir de tratados de estas características, este elemento cobra importancia para la obligación de comunicar proyectos mineros.

El ámbito de aplicación del Tratado, para la constitución de servidumbres mineras, compromete 550 mil km² ubicados entre los paralelos 23 y 49; y en un sector del paralelo 51. De norte a sur, esta región cordillerana se caracteriza por su complejidad ambiental y sociocultural, manifiesta en dos condiciones: presencia de comunidades indígenas y presencia de ecosistemas de extrema vulnerabilidad, donde nacen las aguas que surten de recursos hídricos a todo el territorio comprendido por los valles aledaños.

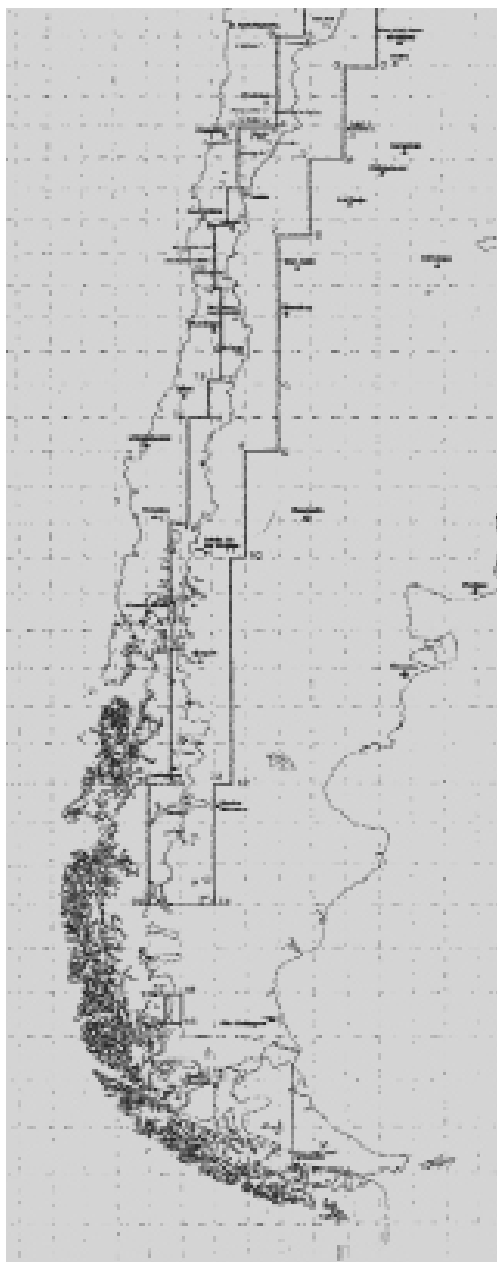
En definitiva, el Tratado y los protocolos que regulan cada megaproyecto minero acogido al mismo, posibilitan la ubicación de tranques de estériles y otras instalaciones dentro del área de operación consignada, en el territorio de cualquiera de los dos países.

3. Impactos del Tratado sobre la soberanía, la legislación y los ecosistemas

La aplicación del tratado no ha estado exenta de dificultades. Para resolver las distorsiones que pudiera implicar un proyecto minero con movimiento transfronterizo diario de personas, bienes y servicios, el Estado define cual es la legislación que se aplica en cada caso. No se eliminan los controles fronterizos, pero se realizan una sola vez al ingresar a las respectivas naciones y al salir de ellas. Esto significa que se resguarda el cumplimiento de todas las disposiciones aduaneras y tributarias, pero evitando la doble tributación y flexibilizando los controles aduaneros frente a la circunstancia de atravesar varias veces la frontera dentro del área de operaciones. En este entendido, no constituye importación ni exportación la salida temporal de bienes dentro del área de operación en tanto se mantengan dentro de ella o salgan hacia el mismo país de origen.

Sin embargo, las normas tributarias establecen que las rentas o ganancias obtenidas con el mineral extraído tributan en el lugar de origen aún cuando no sean procesadas en él. Asimismo, las empresas de

Cuadro 2: Área de aplicación del Tratado



Fuente: Elaboración propia

servicio rentan en el país donde se realice la actividad; el personal dependiente tributa en el país donde se encuentre contratado; y en general, el tratado establece que en las diversas materias que inciden en el proyecto se aplique la legislación interna de los países.

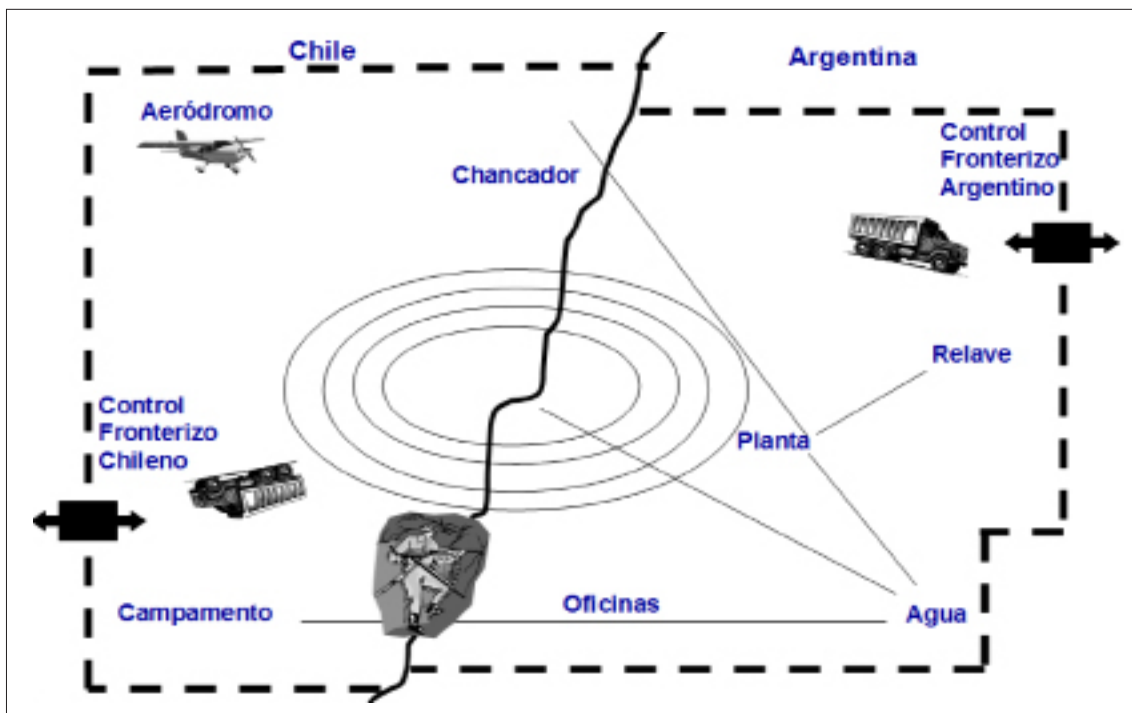
Es en este contexto que el problema de la “doble tributación” ha generado fuerte polémica. La aplicación de los principios propios de la legislación comercial internacional -particularmente, el principio de la nación más favorecida- motivó a la empresa Barrick Gold (pionera en el desarrollo de megaproyectos acogidos al Tratado), frente un aumento de los aranceles tributarios en Argentina, a buscar mecanismos de tributación sólo en Chile. Tal estrategia dio paso a un diferendo binacional, que finalmente se zanjó en el marco de un acuerdo específico, donde se estandarizaron las exigencias tributarias para el proyecto bajo los criterios establecidos por Chile, país con más baja tributación.

Conflictos similares, derivados de la aplicación de las leyes nacionales en proyectos binacionales, se producen en materia ambiental, de salud, migratoria y laboral.

Los aspectos ambientales son los más complejos del Tratado, que establece un estatuto ad-hoc para eliminar “barreras” a la ejecución de proyectos mineros en el área de operaciones. En este marco, la evaluación de impactos ambientales se remite sólo a la legislación nacional: no establece un mecanismo de evaluación que permita dimensionar su magnitud transfronteriza y por lo tanto, permita una evaluación ecosistémica -por ejemplo, que permita ponderar su impacto sobre toda la cuenca hidrográfica y/o sobre un ecosistema de montañas compartido.

En el caso del proyecto minero Pascua Lama, de Barrick Gold, la evaluación chilena estimó que los impactos ambientales estaban claramente mitigados, puesto que los tranques de relave se instalarían en el territorio argentino y, en consecuencia, sus impactos no involucraban al territorio nacional. Carente de una mirada de impacto en el ecosistema andino, la evaluación aplicaba arbitrariamente la línea de frontera para un análisis de impactos que requería una mirada binacional. Por su parte, el impacto sobre los glaciares quedó radicado en el lado chileno, suponiendo que estos glaciares estarían proporcionando recursos hídricos sólo hacia el territorio chileno.

Cuadro 3: Localización de operaciones del proyecto Pascua Lama



Fuente: Elaboración propia

Si se tiene en consideración el Tratado sobre el Medio Ambiente del año 1991 entre Chile y Argentina, vemos que en su artículo 7 se establece que los Estados deben realizar, en el caso de los recursos hídricos compartidos, estudios de impacto ambiental que incluyan la aplicación de normas correctivas, si correspondiera. Este proyecto contempla la existencia de una comisión administradora presidida por: el Subsecretario de Minería y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile; el Secretario de Minería y el Secretario de Integración Americana y MERCOSUR de Argentina. Dicha comisión debe ser administrada por una Secretaría Ejecutiva en los respectivos países.

De forma evidente, estas disposiciones sobre la gestión de aguas compartidas son transgredidas explícitamente por el nuevo Tratado de Complementación e Integración Minera; y la Comisión citada ha velado únicamente por asegurar el éxito del proyecto minero binacional. Esta tendencia se sostiene por la propia definición de la Comisión, que no incorpora a ningún otro actor público, ni privado, ni menos de la sociedad civil, que pueda velar por los impactos ambientales o sociales de los actuales y futuros proyectos mineros en la frontera binacional chileno - argentina.

Reseña Organizaciones Participantes



Programa Argentina Sustentable-PAS, Argentina

El Programa Argentina Sustentable (PAS) es una iniciativa que tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de sustentabilidad, en el marco de un proyecto nacional Sustentable, Democrático y Participativo.

Las áreas de trabajo del Programa son: Elaboración de estudios para el diagnóstico sectorial y temático sobre las diversas dimensiones de la sustentabilidad; Construcción participativa de propuestas de sustentabilidad a nivel local y regional; Generación de espacios de encuentro y debate para la incorporación de los criterios de sustentabilidad en la agenda de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

Forman parte del Programa Argentina Sustentable: Amigos de la Tierra, Fundación ECOSUR y Taller Ecologista.

Referencias:

- <http://www.pas.org.ar/>



FUNDACION SOLON

Fundación Solon, Bolivia

Nace por iniciativa del artista Walter Solón en 1992 con la idea de preservar su obra y difundir sus más sentidas inquietudes y compromiso social. La Fundación se concentra en recuperar las voces de los sectores oprimidos y discriminados: los trabajadores, las trabajadoras del hogar, los pueblos indígenas. La organización lucha por los derechos del agua, combate la impunidad y el libre comercio utilizado como arma de sometimiento de los pueblos más débiles.

Sus áreas de trabajo son Agua, Integración, Cultura social, Mujer, Racismo, Derechos Humanos, Memoria Histórica, Cambio climático.

Referencias:

- Dirección: Av. Ecuador 2519, La Paz, Bolivia.

- Teléfono: 591-2-2417953

- Fax: 591-2-2417057

- Web: <http://www.funsolon.org>



Fundación Agua Sustentable, Bolivia

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Tupiza. Desde el año 2005 la institución trabaja con organizaciones sociales realizando análisis y propuestas técnicas que permitan la constitución jurídica de derechos sociales de acceso, gestión y uso del agua y medio ambiente.

Las acciones de la institución están orientadas a la investigación, incidencia, capacitación y gestión técnica a nivel internacional, nacional, regional y local.

Referencias:

- Dirección: Calle Nataniel Aguirre N° 82, La Paz, Bolivia.

- Teléfono: 591-2- 2151744

- Mail: lapaz@aguasustentable.org

- Web: <http://www.aguasustentable.org>



Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, Perú

CAOI es una red de organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Nació como organización en su Congreso Fundacional celebrado en la ciudad del Cuzco en julio de 2006, con el fin de defender los derechos de los pueblos indígenas y destacar las Deudas Históricas, Sociales, Financieras y Ecológicas que el mundo globalizado ha adquirido con estos pueblos.

La visión que guía el trabajo de la coordinadora es que frente a una crisis integral y global, la solución debe ser también integral y global. Se requieren construir los paradigmas de una nueva civilización que supere aquella iniciada hace cinco siglos, a partir de la invasión, el saqueo y el genocidio, origen de la riqueza de los países imperialistas. Rescatar de las antiguas civilizaciones su modo de vida en armonía con la naturaleza, los seres humanos y los pueblos. Vivir la diversidad universal con equidad, reciprocidad y complementariedad.

Referencias:

- Coordinador General: Miguel Palacín Quispe
- Web: <http://www.minkanadina.org>



Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOCICC, Perú

El movimiento impulsa estrategias de incidencia y monitoreo regional y nacional en torno a políticas referidas al cambio climático. Sensibiliza a los diversos agentes de la sociedad civil, promueve nuevos estilos de vida que recojan la sabiduría ancestral y diversa, aporta en la construcción de capacidades en la sociedad civil y pone en marcha estrategias activas de articulación para la acción a nivel local, regional, nacional y global.

Forman parte de MOCICC más de 28 organizaciones, cuyas referencias se encuentran en la página Web del movimiento.

Referencias:

- Web: <http://www.mocicc.org>



Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida

Integrada por organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesias, Campesinos, ONG(s), Indígenas, Ambientalistas, Organizaciones de Mujeres y Sindicatos de las Empresas Sanitarias, la coordinadora inició su trabajo en 2009, siendo su objetivo fortalecer un frente unido y amplio para avanzar en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.

Sus principales áreas de trabajo son: organización para la acción y movilización ciudadana; resistencia a los procesos de privatización y mercantilización del agua; denuncia de los atropellos al derecho al agua; formación ciudadana para fortalecer procesos de incidencia política frente a las organizaciones e instancias públicas nacionales e internacionales; construir procesos de comunicación; reivindicación de la gestión y control público y comunitario del agua como vía para garantizar el derecho universal al agua.

Referencias:

- Web: <http://www.derechoalagua.cl>



Programa Chile Sustentable, Chile

El Programa Chile Sustentable es una iniciativa de organizaciones ecologistas, académicos, personalidades, creada en 1997 con el objetivo de impulsar la elaboración de una propuesta ciudadana para la transformación social, política y económica de Chile desde el modelo vigente hacia un desarrollo basado en criterios de sustentabilidad.

Los objetivos del Programa Chile Sustentable, son estimular un amplio debate y promover un esfuerzo de concertación intelectual y social orientado a sistematizar y cuantificar metas y acciones para reorientar el proceso de desarrollo chileno hacia la sustentabilidad; y fortalecer la acción ciudadana y sensibilizar a la clase política y a la ciudadanía en torno a los fundamentos políticos para una propuesta de sustentabilidad para Chile.

Referencias:

- Dirección: Irarrázaval 425, oficina 1304, Santiago, Chile
- Teléfono: 56-2-2097028
- Fax: 56-2-2091979

- Mail: chilesus@chilesustentable.net
- Web: <http://www.chilesustentable.net>



Programa Cono Sur Sustentable

Cono Sur Sustentable es una iniciativa de organizaciones ciudadanas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y, más recientemente, Bolivia y Paraguay. Aborda las dimensiones sociales, ambientales y políticas del desarrollo sustentable, realizando estudios y debates sobre agricultura, energía, comercio, equidad social y línea de dignidad.

Desde 1998 han impulsado propuestas de desarrollo para:

- Incentivar el debate sobre el desarrollo a nivel nacional y regional, promoviendo la construcción de plataformas ciudadanas para la sustentabilidad.
- Crear un espacio de articulación regional entre organizaciones y redes ciudadanas, para incorporar criterios de sustentabilidad en las propuestas de integración regional.
- Sistematizar los análisis críticos al modelo de desarrollo vigente, construyendo alternativas de sustentabilidad.
- Elaborar propuestas y aportes conceptuales para incorporar la perspectiva del Sur en el debate sobre sustentabilidad entre Norte y Sur.
- Impulsar el desarrollo de iniciativas de sustentabilidad en otros países de la región.

Las iniciativas de Cono Sur Sustentable cuentan con el patrocinio de la Fundación Heinrich Böll de Alemania.

Las organizaciones que forman parte del Programa son:

- Argentina: <http://www.pas.org.ar/>
- Brasil: <http://www.fase.org.br/>
- Chile: <http://www.chilesustentable.net/>

- Uruguay: <http://www.redes.org.uy/>
- Paraguay: <http://sobrevivencia.org>

Referencias:

Web: <http://www.conosursustentable.org>



Fundación Heinrich Böll

La Fundación Heinrich Böll es una fundación política sin ánimo de lucro cercano al partido de Alianza 90/ Los Verdes, cuyos valores políticos fundamentales se basan en la ecología, la democracia, la solidaridad y la no violencia.

Con el fin de incentivar la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana y el entendimiento internacional, el trabajo de la Fundación se centra en fomentar los valores políticos de la ecología y el desarrollo sustentable, los derechos de las mujeres y democracia de género, democracia y ciudadanía, diversidad de medios y una opinión pública crítica, integración económica, globalización y re-regulación. Además, la Fundación Heinrich Böll promueve el arte y la cultura, la ciencia e investigación y el desarrollo internacional.

Referencias:

Oficina Regional Cono Sur
- Representante: Michael Álvarez Kalverkamp
- Dirección: Bilbao 882, Providencia, Chile
- Tel: 56-2-584 0172

- Fax: 56-2-5840172-101
- Mail: info@cl.boell.org
- Web: <http://www.boell-latinoamerica.org/>